



# Área de ciencia política y de la administración.

Facultad de Derecho – Universidad de Salamanca.

Trabajo de Fin de Master presentado para la obtención del título de Master Universitario en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca.

## **España y Portugal: Las políticas de memoria entre consenso y ruptura.**

Iman Benchili

Directora: Dra. Elena Martínez Barahona

Salamanca, 1 de Julio de 2014.

*El presente Trabajo de Fin de Máster fue elaborado por Iman Benchili, bajo la dirección y orientación de la Dra. Elena Martínez Barahona, teniendo como objetivo la obtención del título de Máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca.*

Salamanca, 3 de Junio de 2014.

La tutora,

Dra. Elena Martínez Barahona

La estudiante,

Iman Benchili

## **Agradecimientos**

*Mis agradecimientos a todos los profesores del Máster en Ciencia Política por su esfuerzo y dedicación y por todos los conocimientos transmitidos.*

*Agradecer especialmente a Elena Martínez Barahona por aceptar dirigir este trabajo, por su paciencia, su tiempo y por sus valiosos consejos e indicaciones.*

*Quisiera dedicar este trabajo a mis padres, Mohamed y Aicha, y a mis dos hermanas Irsan y Myriam por su incondicional apoyo.*

*"La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua."*

Miguel de Cervantès.

*Grândola, vila morena<sup>1</sup>  
Terra da fraternidade  
O povo é quem mais ordena  
Dentro de ti, ó cidade*

---

<sup>1</sup> Canción "Grândola, Vila Morena" de José Alfonso. La canción fue difundida en el canal *Rádio Renascença* la mañana del 25 de Abril de 1974 por la Fuerzas Armadas para confirmar el inicio de la revolución.

## INDICE.

Introducción .....	6
PRIMERA PARTE: El marco teórico-metodológico.....	7
I-1.1. Marco metodológico. ....	7
I-1.2. Justicia transicional, postransicional y políticas de la memoria. ....	9
I-1.3. Justicia transicional, postransicional y políticas de la memoria en la Península Ibérica. ....	12
I-1.4. Plan de trabajo.....	14
SEGUNDA PARTE: Las clases de políticas. ....	18
II-1 Las políticas simbólicas .....	18
II-1.1. La Amnistía: presencia o ausencia. Una forma de olvidar o recordar. ....	18
II-1.2. De la retirada de los símbolos y creación de museos. ....	19
II-1.3. Las fechas conmemorativas. ....	21
II-2 Las políticas de reparación .....	21
II-2.1. La reparación prestacional y reparación económica. ....	22
II-3 Las políticas de justicia.....	23
II-3.1. Dos países: un desequilibrio. ....	23
II-3.2. Hacia una justicia postransicional paralela. ....	27
II-3.3. Distorsión entre realidad política y realidad ciudadana. ....	28
TERCERA PARTE: La introducción de dos dimensiones: el tipo consensual y el tipo por ruptura. ....	31
III-1 La transición como instrumento de contenido. ....	31
III-1.1. La transición consensuada.....	31
III-2 La transición como instrumento de rendición de cuentas. ....	32
III-2.2. La transición por ruptura. ....	32
III-3 Las políticas públicas de memoria o el espejo de la transición. ....	34
III-3.1. Las políticas públicas consensuales. ....	34
III-3.2. Las políticas públicas de ruptura. ....	34
Conclusiones .....	37
Bibliografía .....	39
Páginas de Internet .....	44
Índice de cuadros y tablas. ....	45
Anexos. ....	46

## Introducción

La verdad es imprescindible como “la justicia es esencial a la democracia” (Rubio, 2014:1). Por lo menos es lo que muestra la historia de España en la última década y más con la muerte del Presidente de la transición Adolfo Suárez<sup>2</sup> el 23 de marzo de 2014.

Las políticas públicas de la memoria son “políticas para lidiar con el pasado en la transición (memoria oficial y o pública); de manera más amplia, trata de como la sociedad interpreta y se apropia su pasado (memoria social)” (Barahona de Brito, 2012:69). De esta manera, las políticas públicas de la memoria representan una “realidad de la que sea posible hablar<sup>3</sup>” (Piper, 2007). Se pueden dividir en dos grandes categorías. Existen aquellas que castigan a los instigadores de los crímenes del pasado y otras que tienen como objetivo reparar materialmente y simbólicamente a las víctimas (Aguilar, 2009: 60).

Las políticas de la memoria se juntan con el deber de no olvidar. Efectivamente, abarca el principio de justicia universal cual defiende el derecho universal a que “el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son crímenes contra el derecho internacional”. Igualmente, defiende a que sean investigados y los instigadores juzgados<sup>4</sup>. Por eso, “todos los Estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos en sus tribunales nacionales” lo que abarca la idea de que los derechos humanos no tienen nacionalidades<sup>5</sup> sino son universales. Este derecho pertenece a cada Estado de hacer lo necesario para investigar y castigar a los crímenes del pasado, en referencia a la sentencia del 11 de julio de 1996 del Tribunal internacional de Justicia de la Haya.

La literatura actual sobre las políticas públicas de memoria se centra en los diferentes actores del periodo transicional como actores políticos internos y externos en la puesta en marcha de algunas políticas públicas de memoria (Barahona de Brito, 2002). De la misma

---

<sup>2</sup>El País, Muere Adolfo Suárez, el líder que cambió la historia de España: [http://politica.elpais.com/politica/2013/09/24/actualidad/1380044109\\_467419.html](http://politica.elpais.com/politica/2013/09/24/actualidad/1380044109_467419.html). Acceso: 13/05/2014. <sup>2</sup> Uno de los símbolos de la transición, su muerte suscitó muchos debates sobre los éxitos y fallos del periodo transicional.

<sup>3</sup>En SOLIS DELGADILLO, Juan Mario. Memoria democrática y olvido político: la gestión gubernamental de las políticas de memoria en Chile y Argentina. Universidad de Salamanca, 2012. Pág.35.

<sup>4</sup>El País, Muere Adolfo Suárez, el líder que cambió la historia de España: [http://politica.elpais.com/politica/2013/09/24/actualidad/1380044109\\_467419.html](http://politica.elpais.com/politica/2013/09/24/actualidad/1380044109_467419.html). Acceso: 13/05/2014.

<sup>5</sup>Juan Carlos Jiménez. España y Portugal en transición. Los caminos a la democracia en la Península Ibérica. Pág. 15

manera, algunos autores hacen hincapié de las repercusiones de un hecho traumático en la manera de conducir la transición y en las actitudes actuales de los ciudadanos (Aguilar, 1996 y 2008). Este ámbito se desarrolló en paralelo a los estudios conceptuales de la memoria. No existen una memoria sino memorias. Entre estos podemos resaltar los trabajos de Todorov 2002; Montesperelli 2003 y 2005; Traverso 2007; Aguilar 2008 para estos últimos diez años.

Este estudio no trata en ningún caso de explicar la importancia de los diferentes actores tanto nacionales como internacionales dentro de la definición de estas políticas públicas, ni siquiera de alimentar el debate en torno a la memoria como “constructo social” (Solís Delgadillo, 2012). Este trabajo contribuye a un mejor conocimiento de las políticas públicas de memoria a través del estudio de éstas ubicándolas en un contexto socio-político. El análisis se organiza de la manera siguiente: en una primera parte, se presentará el marco metodológico y teórico, en una segunda parte, se analizará las políticas públicas de memoria en España y Portugal y en una tercera y última parte, se introducirá una dimensión nueva a éstas a través del análisis de la transición en cada país.

## **PRIMERA PARTE: El marco teórico-metodológico.**

### *I-1.1. Marco metodológico.*

El objetivo general de este trabajo es definir la naturaleza de las diferentes políticas públicas de memoria en España y Portugal ubicándolas en un contexto socio-político; es decir la transición a la democracia y la apertura de los derechos políticos y cívicos de los pueblos libres. Una vez iniciado este proceso, intentaremos de manera más precisa comprender por qué en países tan similares a nivel histórico y político (ambos conocieron épocas de dictadura que terminaron al mismo tiempo e iniciaron el periodo democrático a la vez) hubo dos historias diferentes en relación al rubro de justicia transicional. Este trabajo entonces intentará abordar algunos factores que incidieron. En el caso portugués, ver lo que se hizo para que se hiciera una política hacia “la verdad y la justicia” cuando en el caso español, la “impunidad” con ausencia total de políticas de justicia es lo que ha imperado en su historia democrática.

Los objetivos específicos:

- 1- Plantear las políticas públicas de memoria en un contexto pre-transición socio-político a fin de explicar la naturaleza que tienen actualmente.
- 2- Redefinir, más allá de la vertiente jurídica, estas políticas públicas clasificadas como políticas: simbólicas, de reparación, de justicia.
- 3- Relacionar las políticas públicas de memoria con el proceso transicional en sí mismo, atribuyéndolas una dimensión: de tipo consensual o de ruptura.
- 4- Comparar ambos casos a fin de encontrar una razón principal de la posible dicotomía existente entre dos casos similares con un resultado diferente en su variable dependiente.

La primera parte de este trabajo consistirá en establecer la metodología y el marco teórico que elegí para mi trabajo de investigación a fin de, en una segunda parte, definir las políticas públicas de memoria en España y Portugal es decir ¿cómo son las políticas públicas de memoria en España y Portugal? Para terminar, en una tercera y última parte, qué tipo de políticas públicas se han emprendido más y en qué país para otorgar a éstas dos dimensiones, una primera dicho de consenso y otra de ruptura.

*Hipótesis general:*

De acuerdo con las preguntas de investigación y del objetivo general, la hipótesis general de este proyecto establece a través del tipo de transición sufrido por cada caso una estructura bidimensional de las políticas públicas de memoria ofreciendo un panorama tanto jurídico como histórico-político. Una transición por ruptura influye por eso en el tipo de políticas públicas de memoria de tipo ruptura cuando una transición por consenso favorece políticas públicas consensuadas, que definiré posteriormente.

Los casos elegidos, España y Portugal, son muy relevantes dado que comparten una misma historia. En efecto, ambos conocieron un régimen autoritario y ambos tuvieron que instalar una transición al mismo tiempo. En dos lugares diferentes, los mismos problemas se plantearon como el de la implementación de políticas públicas de la memoria. Al convertirse en una democracia, ambos países tuvieron que decidir del camino que iban a tomar: el del consenso o de la ruptura. Este estudio se caracteriza por analizar la naturaleza de las políticas públicas de la memoria, cómo se implementaron y en qué momento. Asimismo, en la similitud de estos dos casos, con los argumentos que acabamos de ver, el resultado que



produjeron ambas transiciones es muy diferente. Eso se puede explicar en gran parte por el tipo de transición que cada país eligió para llegar a la democracia. Este último argumento será objeto de estudio en la tercera parte de este estudio.

Esta investigación se basará en la recolección de datos de corte jurídico como informes, decisiones u órdenes presidenciales, archivos, consulta de páginas web de movimientos de Derechos Humanos, de la Corte Europeo de los Derechos Humanos, de las asociaciones en homenaje a las víctimas de la dictadura y/o guerra civil, base de datos del CIS y medios audiovisuales como reportajes o documentales hechos en el periodo tocando así un panel de disciplinas pasando por la Historia, el Derecho hasta la Sociología.

Los objetivos de la consulta de estas fuentes son:

- 1- Identificar y analizar las políticas públicas de memoria a través de textos legislativos para conocer como son estas políticas, en qué consistieron y cómo fueron aprobadas.
- 2- Combinar las fuentes legislativas con la de Internet a través de los datos difundidos por organismos oficiales y agrupaciones.
- 3- Relacionar los datos encontrados con la fuente teórica existente y los diferentes procesos descritos en esas fuentes.

Mi investigación se basa en el método comparado *MSDO o Most Similar Different Outcome* dado que las características de mi tema residen en la similitud de ambos casos y del resultado diferente. Las dos partes centrales de mi investigación serán de corte empírico-descriptivo apoyándome en estudios previamente hechos sobre los temas de la transición, de las políticas públicas de memoria para los casos de España y Portugal.

#### *I-1.2. Justicia transicional, postransicional y políticas de la memoria.*

El tema de la transición a la democracia fue siempre objeto de estudio y sujeto a diferentes cuestiones en el ámbito de la ciencia política. La transición se define como “*un cambio*”<sup>6</sup> de un estado de ser a otro y supone factores que “*cambian el destino de las naciones y los pueblos*” (Sermeño, 1995).

A principios de los años noventa, O'Donnell y Schmitter plantearon el problema de no alterar al proceso democrático confrontándose al pasado, una concepción de la justicia transicional que se define en los términos siguientes: “the conception of justice associated with periods of political change, characterized by legal responses to confront the wrongdoings

---

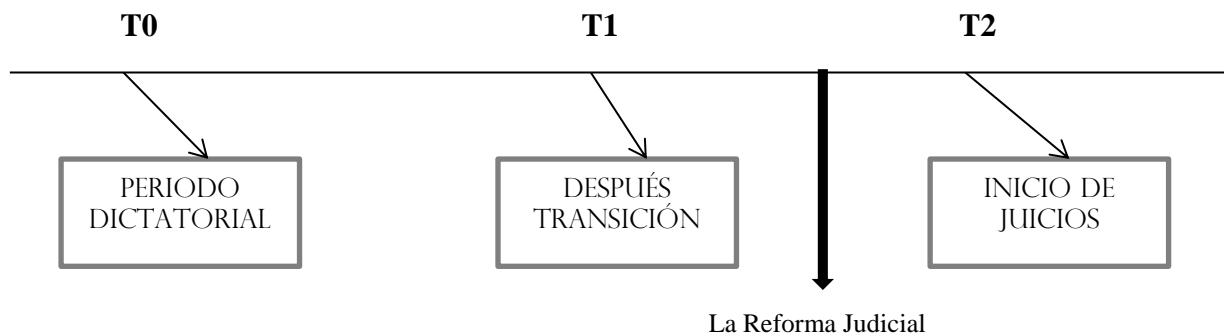
<sup>6</sup> Real Academia Española: <http://lema.rae.es/drae/?val=transicion>. Acceso: 05/05/2014.

of repressive predecessor regimes.” (Teitel, 2000). A su vez, (Skaar, 2011) fundamenta el estudio de la justicia transicional en los comités de reconciliación y comisiones de la Verdad.

Durante la última década, investigadores empezaron a utilizar el término de “justicia postransicional” para referirse a “aquella justicia frente a violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar, que se lleva a cabo después de la transición a la democracia” (Martínez Barahona, 2012). (Skaar, 2012) lo define como “el enjuiciamiento de militares por graves violaciones a los derechos humanos al menos un ciclo electoral después de la transición”. La misma autora fundamenta su análisis enfocándose en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La independencia de los jueces se convierte en un factor decisivo en el proceso de justicia postransicional, meramente para los casos latinoamericanos. Es un novedoso enfoque que se relaciona con otros trabajos sobre *judicial politics* y el papel de los órganos judiciales como nuevos actores políticos durante la transición y postransición (Pion-Berlín y Arceneaux, 1998). El *accountability* (Collins, 2009) del Estado de derecho frente a violaciones del pasado se convierte en un debate central en los estudios sobre justicia postransicional. De la misma manera, el papel de la sociedad civil para rendir cuentas a los involucrados, familiares y víctimas, se convierte en otro tema central del estudio de la justicia postransicional. (Roniger, 2012; Dutrénit Bielous, 2012).

Skaar (2012) distingue tres fases en las que se pueden enjuiciar a los instigadores de un régimen dictatorial. Ella llama T0 el periodo autoritario en el que el Poder Judicial no desempeña un papel fuerte debido a su ausencia de independencia. El periodo T1 se sitúa inmediatamente después de la transición a la democracia y el periodo T2 se refiere al inicio de juicios. Ella destaca un periodo llamado *Reforma Judicial* entre T1 y T2 en el que se emprenden muchos cambios y reformas del sistema judicial de aquel país. Este estudio nos permite mapear de manera general las diferentes fases del proceso de justicia transicional y postransicional. Las purgas y saneamientos se pueden situar tanto en el periodo transicional como en el periodo postransicional dependiendo de cada caso.

## CRONOLOGÍA I GENERAL DE LA JUSTICIA.



Fuente: Elaboración propia con base de Elen Skaar, ¿Puede la independencia judicial explicar la justicia postransicional, 2012. Pág. 27.

El tema de las políticas públicas de memoria no ha sido muy estudiado. Las políticas públicas de memoria son, en muchos casos, fruto de acuerdos entre la ciudadanía y las élites democráticas y dictatoriales para imponer una nueva visión del futuro, basándose en el olvido de un hecho traumático (Aguilar, 1996) y en la reconciliación (Barahona de Brito, 2002). Son el núcleo de la transición porque la justicia es “*esencial para la democracia*” (Rubio, 2014). Algunos estudios se centraron en el papel de la ciudadanía cuanto a la demanda de una nueva justicia a través de reformas del poder judicial (Seider, 2003; Domingo, 2004, Brinks, 2009). La transición involucra la puesta en marcha de políticas públicas para juzgar los actores del pasado a fin de permitir el cambio al futuro (Bono Lahoz, 2007). Esto tiene como objetivo fomentar una memoria colectiva menos dolorosa (Aguilar, Balcells y Cebolla, 2011). La gran parte de los estudios se hicieron sobre los casos latinoamericanos. Entre estos podemos resaltar el de (Solís Delgadillo, 2012) que se centró en los factores que incidieron en la instalación de éstas para el caso chileno y argentino. Otros estudios subrayaron el carácter sacralizado de las políticas públicas de memoria y el consenso nacional en Uruguay (Roniger, 2012), la falta de justicia y la impunidad en El Salvador y Guatemala (Martínez Barahona, 2012) que hacen eco con las numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuanto a los fallos de la justicia transicional mexicana e uruguaya (Dutrénit Bielous, 2012).

### *I-1.3. Justicia transicional, postransicional y políticas de la memoria en la Península Ibérica.*

Destacamos muy pocos estudios comparativos entre España y Portugal. Entre estos podemos destacar los trabajos de (Sánchez Cervello, 1995) que fundamenta su análisis en una similitud entre la experiencia portuguesa y la experiencia española afirmando que la Revolución de los Claveles tuvo un efecto sobre la transición española. A su vez, (Jiménez, 2009) habla de una dimensión “*intra-ibérica*” de la transición para calificar a la ruptura española y portuguesa.

La literatura de la justicia transicional portuguesa subraya la importancia de los diferentes actores de la transición (Graham, 1993; Harvey, 1978) así que las grandes reformas económicas como la Reforma Agraria (Barreto, 1989). Existen trabajos que se centran en la sociedad del momento y los cambios institucionales en Portugal durante la transición (Corkill, 1993; Medeiros Ferreira, 2000). Sin embargo, muchos trabajos se enfocaron, sobre todo desde la disciplina de la historia, en explicar la Revolución de los Claveles del 25 de Abril de 1974 (Chilcote, 1987). De la misma manera, subrayaron la dificultad por Portugal de mantener sus colonias (Angola en particular), una marcha hacia el proceso de descolonización (Wilhem Heimer, 1980; Ennes Ferreira, 1990; Pires Lemos, 1991). A la par, encontramos los diferentes trabajos de Juan Linz y Alfred Stepan sobre los diferentes factores que condujeron a la caída de los regímenes democráticos de Europa del Sur y des los problemas que enfrentaron los actores principales de la transición en la consolidación de ésta (Linz; Stepan, 1978,1996, 2000). Vemos que el tema de la justicia transicional se vio estudiado desde el tema de la transición a la democracia como proceso y muy poco desde las políticas públicas emprendidas durante y post-transición.

Los trabajos sobre la justicia transicional en España se centraron en buscar ¿cómo en una *España invertebrada* se ha llevado a cabo este proceso? (Ortega y Gasset, 1921) ¿Cómo se ha preparado la transición? Algunos autores señalan la importancia de los partidos políticos durante este paso como otro jugador dentro de la arena política-transicional (Miguel González, 1990). Asimismo, se insiste el relevante papel de los medios de comunicación y la prensa, en concreto, cuanto al vínculo que creaban entre la ciudadanía y las élites democráticas y dictatoriales como apoyo secundario a la transición u oposición secundaria al régimen autoritario (Del Aguila, 1984). Algunos investigadores insistieron sobre la importancia del movimiento laboral durante la represión española y del Estado en las transiciones ibéricas (Fishman, 1989 y1990) para crear la ruptura entre el pasado autoritario y el futuro democrático (Maravall, 1981), puntos que renden cada transición peculiar.

Desde otras disciplinas, como la Historia, algunos estudios indicaron la ausencia de gestión del pasado, desde la transición hasta nuestros días, a través de los archivos de la Delegación Nacional de Servicios en Salamanca como testimonio de la “*transición de la amnesia*” (González Quintana, 2007). Igualmente, la justicia transicional ha sido estudiada desde una perspectiva antropológica tratando de centrar el estudio la memoria española y las exhumaciones de las fosas comunes (Ferrándiz Martín, 2007). Desde la disciplina de la psicología política, algunos autores ponen de relieve la importancia de la identidad nacional y de la memoria colectiva durante la Guerra Civil española como procesos psicosociales del recuerdo (Herranz Basabe, 1999).

Los trabajos sobre la justicia postransicional en España están representados, meramente, por la crítica de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, símbolo del fracaso para la justicia en España (Juliá, 2006 y 2011). Igualmente, los fallos judiciales del Estado español están señalados y reprimidos a nivel nacional, por la población que pide un reconocimiento del pasado, poniendo fin a la Ley 46/1977 de Amnistía, e internacional (Chinchón Álvarez, 2012). Notamos que a día de hoy no existe ningún trabajo sobre la justicia postransicional en Portugal.

Muchos estudios se enfocaron en el proceso transicional y postransicional sin tomar en cuenta las políticas públicas de memoria. Los análisis se enfocaron en explicar los procesos transicionales para constatar la falta de la justicia para el caso español y la perfecta justicia para el caso portugués. Las políticas públicas definen la agenda política de un momento, en este caso la transición, y reflejan el estado de ánimo tanto de la ciudadanía como de las élites.

Por consecuencia, el objetivo de este estudio, es explicar cómo la naturaleza de las políticas públicas de memoria se explica por el tipo de transición efectuado, una transición por golpe o una transición pactada. La meta no es de constatar la ausencia o presencia de tales políticas públicas de memoria, así que muchos investigadores se dedicaron a este objetivo, sino de dar a comprender por qué en un país se emprendieron un tipo de política pública y no otra. Finalmente, partimos de la idea de que una transición por consenso tiene tendencia a crear políticas públicas de memoria de consenso cuando una transición por ruptura crea políticas públicas de memoria de ruptura, siguiendo la teoría de Santiago Míguez González. Esto permite dar a conocer mejor los factores que explican los fallos de la justicia transicional española frente a la justicia transicional portuguesa aplicando el marco teórico de Juan Mario Solís Delgadillo para España y Portugal que estudiaremos en el siguiente apartado.

#### *I-1.4. Plan de trabajo.*

De acuerdo con el marco expuesto anteriormente, este análisis propone enfocarse sobre las políticas públicas de memoria en España y Portugal, desde la transición hasta nuestros días.

No se trata en ningún caso de enriquecer el debate sobre el tema de la memoria como concepto sino recordar su importante característica: su intemporalidad. En efecto, se sitúa entre el pasado, el presente y el futuro. Tampoco “se puede sostener que la memoria sea algo homogéneo, indiviso y estático” (Solís Delgadillo, 2012: 27) y tienes sus efectos perversos como “el deber de olvido” (Solís Delgadillo, 2012: 29). Asimismo, no existe una única memoria sino múltiples memorias que concurren en el espacio social y psíquico, un combate digno entre recuerdos o “concurrence victimaire”<sup>7</sup>. Además, es objeto de variaciones cuanto a la hegemonía impuesta. En efecto, (Calveiro, 2006: 368) habla de un “monopolio de la memoria” es decir una reconfiguración de la memoria a través las fuerzas políticas gobernantes en un cierto momento:

La memoria opera como puente que, articulando dos orillas diferentes, sin embargo las conecta. Al hacerlo nos permite, como acto central, recordar aquello que se borra del pasado, o bien se confina en él, precisamente por sus incómodas resonancias con el presente. La memoria es sobre todo acto, ejercicio, práctica colectiva, que se conecta casi invariablemente con la escritura<sup>8</sup>.

A su vez, las políticas públicas de memoria son unas de esas prácticas colectivas de la memoria. Se definen como “un conjunto de medidas políticas instrumentadas desde el gobierno, tendientes a interpretar el pasado y reparar a sus víctimas. Sin embargo, lo que está en juego en las políticas de memoria no es el pasado sino el presente y la capacidad que se tenga para integrar a ambos en “una realidad de la que sea posible hablar”<sup>9</sup>” (Solís Delgadillo, 2012: 35) Además, se insertan en coyunturas sociales, económicas y políticas (Parsons, 2007; Skocpol, 1985). Este proceso de elaboración de las políticas públicas de memoria involucra a actores (Solís Delgadillo, 2012: 49) tanto internos como externos (Aguilar, 2002; Barahona de Brito, 2002). Asimismo, las políticas públicas de memoria son “una construcción social del recuerdo” como “proyección pública y colectiva de la memoria democrática” y también “una

---

<sup>7</sup> La expresión « Concurrence victimaire » o « competición victimaria ». Traducción propia. Fue creada y utilizada por Eric Zemmour, un periodista político francés en 2011 para referirse a la memoria de la Shoah, muy debatida en Francia actualmente. Sobre este tema, se puede relacionar con el trabajo del filósofo francés Alain Finkielkraut en *Une voix vient de l'autre rive* (2000).

<sup>8</sup> Calveiro, Pilar. Los usos políticos de la memoria. Página 377.

<sup>9</sup> Piper, 2007 in Solís Delgadillo, Juan Mario. Memoria democrática y olvido político: la gestión gubernamental de las políticas de memoria en Chile y Argentina. Universidad de Salamanca. 2012.

reconstrucción del pasado (...) que cumpliría las veces de una ideología política”. Finalmente, tienen como objetivo principal “la construcción de una memoria colectiva” (Juliá, 2011:15).

El estudio se divide en dos partes. La primera consiste en una aproximación al estudio de Juan Mario Solís Delgadillo, quien, en su tesis doctoral presentada a la Universidad de Salamanca en 2012, divide las políticas públicas de memoria en tres categorías, resumidas en el [Cuadro 1]: las políticas simbólicas, de reparación y de justicia. Las políticas simbólicas tienen como objetivo “resarcir la memoria de las víctimas y sus familiares (...) y de la sociedad entera a través de recordatorios en el espacio público que se traducen en momentos, plazas, nombres de calles, museos y todas aquellas expresiones que a través del arte se enlazan para mantener viva la memoria colectiva”. Las políticas de reparación se caracterizan por su valor prestacional mediante “la extensión de pago de determinados servicios públicos y creación de programas específicos para su beneficio” o en una segunda subcategoría, monetaria mediante “transferencias económicas directas”. En último lugar, las políticas de justicia tienen un objetivo más diferente, el de restablecer la verdad a través de la creación de Comisiones de la Verdad como en Argentina y Chile a fin de juzgar y castigar a los responsables de los crímenes cometidos. (Solís Delgadillo, 2012: 36 y 37).

Juan Mario Solís Delgadillo aplica esta clasificación a Argentina y Chile. El objetivo es de retomar esta clasificación pero aplicándola a España y Portugal. La primera parte de este estudio consistirá en registrar todas las políticas públicas de memoria para España y Portugal mediante cuadros recapitulativos y atribuirles una naturaleza propia según esta clasificación. Se tratará, según los criterios enunciados en el cuadro siguiente, ver cuáles son las políticas simbólicas, de reparación y de justicia [Cuadro 1].

CUADRO 1: LOS TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMORIA.

Reparación	Justicia	Simbólica
Tipo de compensación: monetaria/prestacional	Tipo de compensación: jurídica.	Tipo de compensación: reconocimiento público.
Beneficiarios: Víctimas directas y familiares hasta cierto grado de afinidad.	Inciden en el estatus legal de las personas, celebrar actos jurídicos, anteponerse como querellante en juicios, resolver problemas patrimoniales.	Objetivos más heterogéneos y más abarcadores; inciden en la educación y la cultura.

Fuente: Solís Delgadillo, Juan Mario. Memoria democrática y olvido político: la gestión gubernamental de las políticas de memoria en Chile y Argentina. Universidad de Salamanca. 2012. Pág.59.

La segunda parte consiste, una vez atribuido el tipo de política pública de memoria, objeto de la primera parte, en concederlas otra dimensión según la tipología de la transición de Santiago Míguez González que distingue dos tipos de transición: una transición por consenso y una transición por ruptura [Cuadro 2].

CUADRO 2: LOS TIPOS DE RUPTURA.

TIPO DE RUPTURA	RUPTURA SIMPLE O PURA	RUPTURA PACTADA
Naturaleza del proceso	Momento de cambio- democracia	Proceso de democratización
Elementos de las estrategias	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confrontación, movilización y negociación</li> <li>- Unidad de la oposición para imponer el Gobierno Provisional y la ruptura</li> <li>- Negociación con los poderes facticos (Ejercito, Iglesia, Finanzas...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Negociación</li> <li>- Unidad de la oposición para negociar con mayor fuerza</li> <li>- Negociación con los poderes facticos y con el Gobierno</li> </ul>
Dirección del proceso	Gobierno Provisional formado por la oposición política	Gobierno del régimen
Elementos del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso constituyente dirigido por el Gobierno Provisional</li> <li>- Consulta sobre la forma del Estado y de Gobierno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso constituyente dirigido por el Gobierno del régimen</li> <li>- Aceptación de la Monarquía</li> </ul>

Fuente: Elaboración con base de la clasificación de Santiago Míguez González, La preparación de la transición a la democracia en España, 1990.

Por eso, basándose en su tipología de la transición, se crearán dos dimensiones: una de consenso y otra de ruptura. Basándose en la literatura existente sobre las políticas públicas de memoria, a fin de dar esta dimensión, crearé indicadores para medir éstas en España y Portugal para saber si son de tipo simbólicas/consensuales, de reparación/ consensuales, de justicia/consensuales o al revés simbólicas/de ruptura, de reparación/de ruptura, de justicia/de ruptura [Cuadro 3].

CUADRO 3: UN ASPECTO DIMENSIONAL.

Tipo de política pública de memoria	Dimensión
Simbólica	Consenso
Reparación	Consenso
Justicia	Ruptura



Estos criterios se basan en los hechos más redundantes de la literatura transicional y postransicional (Barahona de Brito, 2002) en particular. Para el caso español, vivió una transición por consenso, las políticas públicas de memoria se fundamentan en cuatro criterios: el olvido, la ausencia de políticas públicas de justicia, una memoria común creada y una verdad parcial impuesta. Para el caso portugués, considerado por los historiadores y politólogos como un país que vivió una transición por ruptura o por golpe democrático, se consideran cuatro criterios: una ausencia del olvido, presencia de políticas públicas de justicia, una memoria pasada privilegiada y una verdad completa en la medida de lo posible [Cuadro 4].

CUADRO 4: CRITERIOS PARA DIFERENCIAR LA CLASE DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE MEMORIA: UN ASPECTO DIMENSIONAL.

<b>Indicadores</b>	
<b>Por consenso</b>	<b>Por ruptura</b>
Olvido	Ausencia de olvido
Ausencia de Justicia	Presencia de justicia
Memoria común creada	Memoria pasada privilegiada
Verdad parcial	Verdad completa

Fuente: Elaboracion propia con base de Alexandra Barahona de Brito (2002).

De esta manera, se analizarà cada politica publica de memoria para ambos paises enmarcàndolas en un contexto històrico-social y polìtico-econòmico a fin de atribuirle una naturaleza propia a cada una en funciòn de la clasificaciòn previamente expuesta.

## **SEGUNDA PARTE: Las clases de políticas.**

Después de haber enmarcado este estudio metodológicamente y teóricamente, esta segunda parte del trabajo se centra en registrar e identificar todas las políticas públicas de memoria implementadas en España y Portugal desde la transición hasta nuestros días. En adecuación con la clasificación de Juan Mario Solís Delgadillo que hace de las políticas públicas de memoria, seguiremos el esquema siguiente. En una primera parte, estudiaremos todas las políticas públicas simbólicas, en una segunda parte, las de reparación para terminar en una tercera y última parte, con las de justicia.

### *II-1 Las políticas simbólicas*

Las políticas públicas simbólicas son “Esta clase de políticas, a diferencia de las de reparación y justicia, suelen ser las más tardías, heterogéneas y polémicas. Son “tardías” ya que por lo general van apareciendo conforme va transcurriendo el tiempo y la democracia se va consolidando” (Solís Delgadillo, 2012: 208). Además, son la definición del reconocimiento oficial del horror y definen el resto de las políticas públicas de memoria emprendidas (Solís Delgadillo, 2012: 210). En este apartado, se tratará de estudiar las políticas públicas simbólicas según los criterios de Juan Mario Delgadillo, previamente expuestos, para España y luego Portugal.

#### *II-1.1. La Amnistía: presencia o ausencia. Una forma de olvidar o recordar.*

**En España**, notamos dos grandes políticas públicas simbólicas: la Ley de Amnistía 46/1977 y la Ley 52/2007 de Memoria Histórica [Cuadro 9]. La primera pone un cuadro jurídico al ir más allá de lo que está propuesto por la ley, es decir, juzgar a los instigadores del franquismo. La Ley de Amnistía, como su nombre lo indica, prohíbe los juicios y permite la reconciliación nacional mediante el olvido total del pasado. La Ley de Memoria Histórica 52/2007, treinta años después, es a su vez un reconocimiento oficial y público de que hubo un hueco jurídico en este ámbito. Sin embargo, tampoco propone investigar los casos y encontrar una solución al problema de las fosas comunes sino que propone la retirada de símbolos franquista del espacio público así que reparaciones prestacionales y monetarias, muy poco de lo esperado por los familiares de las víctimas. Ambas leyes nos juzgan y de esta manera, se consideran a políticas simbólicas. Fundamentan el consenso, el olvido y cristalizan lo que hubiera podido ser una ruptura. Igualmente, el Real-Decreto 1891/2004 a pesar de crear una Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, no juzga en el sentido de que no persigue a criminales y tampoco es una

Comisión de la Verdad cuyo objetivo sería de resarcir la memoria, saltar la verdad y juzgar sino simboliza lo que podría ser una *Comisión de la Memoria*, es decir, buscar a fin de contentar a los familiares a través de informes. Es símbolo “moral” como lo muestra el Artículo 2 de este Real-Decreto:

**Artículo 2 Funciones:**

Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:

- a) El estudio de carácter general de los derechos reconocidos a las víctimas de la guerra civil y a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista, así como elaborar un informe sobre el estado de la cuestión.
- b) Elaborar un informe sobre las condiciones que permitan el acceso a los archivos públicos y privados que resulten necesarios para llevar a cabo la finalidad perseguida.
- c) Elaborar, para su elevación al Gobierno, un anteproyecto de ley en el que se regulen las medidas necesarias para ofrecer un adecuado reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas.
- d) Cualesquiera otras que la Comisión considere necesarias para lograr sus fines, siempre dentro del ámbito de sus competencias.

**En Portugal**, no existe una ley de Amnistía dado que lo que prevaleció fue la ruptura a través de olas de saneamientos y purgas de las altas y bajas capas de la sociedad. Sin embargo, notamos tres políticas simbólicas emprendidas como la retirada de los símbolos y las fechas conmemorativas, objeto de estudio en los apartados siguientes.

*II-1.2. De la retirada de los símbolos y creación de museos.*

**En España**, el Orden CUL/3190/2008 en consonancia a la Ley 52/2007 de Memoria Histórica es una política pública simbólica por ser *“el estilo de representación el más común y extendido de todas las clases de las políticas simbólicas. A través de los monumentos, la memoria se visibiliza, se materializa, pero sobre todo, se marca el espacio público.”* (Solís Delgadillo, 2012: 214) declarando en su Artículo 15:

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.

3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.

4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.

Sin embargo, últimamente, muchos periodistas llaman la atención sobre el fallo de esta Ley que suponía la retirada de los monumentos y símbolos franquistas poniendo de relieve que *“El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha reconocido este miércoles en el Congreso que el Gobierno del PP no ha retirado ni un sólo vestigio franquista desde que tomó posesión y ha dejado claro que si no lo ha hecho no ha sido por falta de voluntad, sino por motivos "económicos", ya que retirarlos implicaba un "alto desembolso", o de protección patrimonial. Tema espinoso este teniendo en cuenta, por ejemplo, sabiendo que esta semana el Gobierno anunció en el BOE que gastará 280.000 euros en restaurar el Valle de los Caídos<sup>10</sup>.”* Una discordancia entre los gobiernos que va más más allá del periodo transicional sino postransicional.

**En Portugal**, es similar en el sentido de que se han emprendido el mismo tipo de políticas públicas simbólicas, como el cambio del nombre de las calles justamente después de la Revolución de los Claveles en 1975. Sin embargo, en término de política pública simbólica durante la transición, es la única. Otras políticas públicas simbólicas, dos otras, siguieron pero post-transición a principios de los años noventa, como dar los honores militares al general Humberto Delgado y crear un Archivo Nacional en 1996. Efectivamente, son las primeras iniciadas después de la caída del régimen pero como lo veremos más allá, se emprendieron mucho más políticas de justicia que simbólicas y de reparación. Lo importante que debemos destacar en este apartado, es que a la luz democrática de 1975 en Portugal, la concentración se hizo en la ruptura a través de la justicia como componente de la construcción democrática. En Portugal no existen ni museos ni monumentos oficialmente dedicados a protagonistas del *Estado Novo* por cláusula constitucional art.46 de la Constitución portuguesa. En 2007, un alcalde de un pueblo quería crear un museo dedicado al dictador Salazar y se levantaron miles de voces para protestar *“En la manifestación del pasado día 3 se denunció que un museo en honor de Salazar en Portugal «sería como si en Alemania construyeron un monumento en honor de Adolf Hitler»* y la URAP<sup>11</sup> o Asociación de Resistentes Antifascistas subrayan la inconstitucionalidad de este proyecto, prueba de que Portugal es marcada por su vigor pasado

---

<sup>10</sup>Diario Publico.es del 22 de Mayo de 2013: El Gobierno no retira monumentos franquistas por motivos económicos pero repara el Valle de los Caídos: <http://www.publico.es/politica/455816/el-gobierno-no-retira-monumentos-franquistas-por-motivos-economicos-pero-repara-el-valle-de-los-caidos>. Acceso: 25/03/2014. En España, el Valle de los Caídos queda un lugar simbólico (art. 16 de la Ley 52/2007) por las nombres fosas comunes existentes que residen. Es un símbolo del pasado franquista no resuelto. A su vez, el Archivo salmantino (art.20 de la Ley 52/2007) es un medio de educar a la población y recordar lo horroroso.

<sup>11</sup>Un museo en honor del dictador salazar provoca la ira de los antifascistas portugueses: <http://gara.naiz.info/paperezkoa/20070311/7493/es/Un/museo/honor/dictador/salazar/provoca/ira/antifascistas/portugueses>. Acceso: 25/03/2014.

de ruptura. Este rompimiento se demuestra por la ausencia total de Museos o Monumentos dedicados al periodo dictatorial aun un intento reciente de crear el Museo de la República y de la Resistencia<sup>12</sup> - cuyo financiamiento hubiera sido privado - el único éxito.

### *II-1.3. Las fechas conmemorativas.*

Mendoza (2005: 5) sostiene que “las fechas [...] son tiempos de la memoria que posibilitan que una sociedad se conciba con tradición, con pasado, con identidad, es decir, que se reconozca como tal; o bien, son coyunturas en las que las memorias son producidas o activadas” (Vezzetti, 2009: 150). Las fechas cargan símbolos, la memoria, el pasado y el futuro. Tenemos muy pocos ejemplos a lo que se refiere a las fechas conmemorativas.

**En España**, como referente directo de la Guerra Civil o del periodo franquista, existe solamente el 6 de diciembre es el Día de la Constitución en el que se celebra a nivel nacional el referéndum constitucional de 1978. En fin, “*la voluntad de suprimir el aniversario de la guerra civil como fiesta nacional marca la línea divisoria entre quienes desean fundamentar la convivencia entre los españoles sobre bases pacíficas y los que sueñan con volver a transformar la Península en el escenario de un conflicto fratricida*” (Aguilar Fernández, 294: 1996).

**En Portugal**, el día 25 de abril o *Dia da Libertade* es un día festivo nacional que marca el fin del régimen autoritario y el inicio de la democracia con la Revolución de los Claveles. Conjuntamente con el Día de la Raza o *Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades* Portuguesas, es un día que celebra la raza portuguesa y fue festivo desde El Estado Novo hasta la Revolución de los Claveles, sigue siendo día nacional.

### *II-2 Las políticas de reparación*

Las políticas de reparación se caracterizan por su valor prestacional mediante “la extensión de pago de determinados servicios públicos y creación de programas específicos para su beneficio” o en una segunda subcategoría, monetaria mediante “transferencias económicas directas” (Solís Delgadillo, 2012: 36 y 37). Este apartado se centrará en analizar las políticas de reparación de tipo prestacional y monetaria en España y luego Portugal según los criterios de Juan Mario Solís Delgadillo, anteriormente enunciados.

---

<sup>12</sup>Museu da Republica e Resistência, Lisboa: <http://republicaresistencia.cm-lisboa.pt/menu/home.htm>. Acceso: 25/03/2014.

### *II-2.1. La reparación prestacional y reparación económica.*

**En España**, la primera política pública de reparación prestacional se hizo bajo el gobierno de Adolfo Suárez (UCD) con la Ley 35/1980 que reconoció el derecho de percibir pensiones a mutilados del Ejército de la República. La segunda, se hizo más tarde bajo el gobierno socialista de José Luis Zapatero en 2010 con el Orden Presidencial 786/2010 que convocó la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo [Cuadro 10].

Dos políticas públicas de reparación de tipo económica se iniciaron por primera vez con la Ley 5/1979 bajo el gobierno de Adolfo Suárez en 1979. Esta primera reconoció el derecho a percibir pensiones a los familiares de los españoles fallecidos durante la Guerra Civil. La otra se inició bajo el gobierno de José Luis Zapatero en 2007 con la Ley 52/2007 o Ley de memoria histórica. La Ley se basa en “el derecho de indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia (...) y que no habían recibido hasta ahora la compensación debida) en referencia al Artículo 10 de esta misma ley, se otorga una indemnización de 135.000 euros *“a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de diciembre de 1977”*. Se añade una mejora de las prestaciones ya otorgadas por la Ley 5/1979 del 18 de septiembre con objetivo de proteger a través de una asistencia social, médica y farmacéutica (Artículo 5). Igualmente, se percibieron una pensión de orfandad de 132.86 euros al mes para *“huérfanos no incapacitados mayores de veintiún años causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1973 y 35/1980”* (Artículo 6). Para los prisioneros políticos, se regula sus derechos a percibir una indemnización, uno de los fallos de la Ley de Amnistía 46/1977 con los criterios siguientes “tres o más años de prisión: 6.010.12 euros, por cada tres años completos adicionales: 1.202.02. Euros”. (Artículo 7).

**En Portugal**, existe una política pública de reparación de tipo prestacional iniciada por el gobierno socialista de Jorge Sampaio en 1997 con el pago de la seguridad social y de las pensiones a militantes del Estado Novo. Los primeros intentos fueron impulsados bajo gobierno de Francisco Da Costa Gomes y el Movimiento de Fuerzas Armadas en 1975 sin éxito.

### *II-3 Las políticas de justicia*

Las políticas públicas de justicia son aquellas que atribuyen un estatus legal oficial y jurídico de carácter público a una entidad o individuo a fin de solucionar un problema. Este estatus puede presentarse como una compensación esta vez jurídica en cuanto a una tercera entidad o persona (Solís Delgadillo, 2012: 59). En este apartado, en un primer momento, se tratará de identificar las diferentes fases en el proceso de justicia transicional y postransicional tanto para España como para Portugal siguiendo la cronología propuesta por (Skaar, 2012). En una segunda parte, se presentará todas las políticas de justicia emprendidas en ambos países según los criterios de Juan Mario Solís Delgadillo a fin de mostrar que existe un real desequilibrio en los juicios pronunciados entre ambos países. Finalmente, esto conducirá a concluir, en un tercer apartado, que existe una distorsión entre lo que los entes políticos hacen y lo que la ciudadanía quiere que hagan.

#### *II-3.1. Dos países: un desequilibrio.*

En este apartado, en continuación con lo que hemos visto previamente, se tratará de hacer un balance de las políticas públicas de justicia en ambos países. Un balance que nos conducirá a concluir que existe un desequilibrio en cuanto a los juicios pronunciados en España con respecto a Portugal.

**En España**, no tuvo un proceso de justicia transicional como tal sino a través de leyes de reparación prestacional o económica y simbólicas. La transición se fundamentó en el consenso cuya culminación fue *Los Pactos de Moncloa en 1977*. En efecto, la Ley de Amnistía 46/1977 puso las condiciones de la transmisión de poder, la reconciliación nacional y por eso el olvido (Aguilar Fernández, 2002:157). Esta ley consiste en “un primer lugar, vaciar las prisiones de presos políticos de la oposición, incluso de aquellos que habían cometido delitos de sangre. En segundo lugar, (...) se aprobó una suerte de ley de “punto final” para los responsables políticos del régimen anterior”. De la misma forma, esta reconciliación se asienta sobre un impedimento de “perseguir a los torturadores y a todos aquellos que hubieron cometido abusos de poder durante la dictadura”. Eso es el “punto final”<sup>13</sup> central de una ley que sigue siendo vigente y que impide, aun políticas públicas simbólicas y de reparación emprendidas, una justicia. Una justicia que para muchos es inherente y esencial a cualquier sistema democrático. Sin embargo, el Orden de Presidencia del 16/12/2005 tiene una vertiente judicial en el sentido de que convoca subvenciones para las

---

<sup>13</sup>Nombre dado a la Ley de Amnistía 46/1977 para mostrar que impide la investigación y el castigo de los instigadores del franquismo.

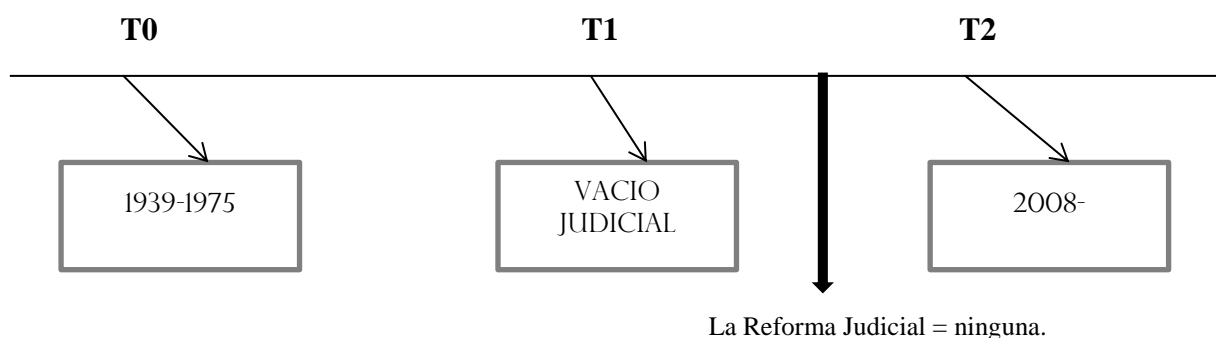
exhumaciones de las fosas comunes. En este apartado, no hablaremos del caso español así que no existen políticas públicas de justicia oficiales emprendidas por el Estado. Sin embargo, recientemente algunos casos fueron tratados por el juez Baltazar Garzón, sujeto de otro apartado más allá en este estudio que llamaremos *justicia paralela postransicional*.

CUADRO 5A: PARA LA RECONCILIACIÓN Y EL OLVIDO (ESPAÑA)

PERIODO	PROCESO
1977	Ley de punto final
1978-1990	Normalización y Consolidación democrática
2008-	Justicia postransicional paralela

El caso español muestra que con la Ley de Amnistía de 1977 no se permitió el desarrollo de una justicia postransicional. Sin embargo, desde 2008, el exjuez Baltasar Garzón decidió reabrir algunos casos en cuanto a las violaciones del franquismo poniendo un contrapoder a la Ley del olvido previamente enunciada. Esto marca el deseo, por desgracia de no haber tenido un periodo de justicia transicional (Aguilar Fernández, 2008), de recuperar e investigar el pasado. Se puede considerar, en cierta medida, el principio de un nuevo cambio en el papel de los jueces como personas independientes y para el Poder Judicial en su conjunto cuanto a su decisión de ir en contra del Estado de derecho. Asimismo, el periodo T1-T2 o de reforma judicial no existe para el caso español. En efecto, hubo diferentes reformas del sistema del poder judicial pero en ningún caso hubo una reforma del estatuto de amnistía que preveía la Ley 46/1977.

CRONOLOGÍA III GENERAL DE LA JUSTICIA ADAPTADA AL CASO ESPAÑOL



Fuente: Elaboración propia con base de Elen Skaar, ¿Puede la independencia judicial explicar la justicia postransicional, 2012. Pág. 27.



**En Portugal**, el periodo judicial se divide en tres procesos según (Costa Pinto, 2002: 103) resumido en este cuadro que sigue.

CUADRO 5B: PARA LA VERDAD Y CONTRA LA IMPUNIDAD (PORTUGAL)

PERIODO	PROCESO
1974-1975	Justicia revolucionaria (purgas legales)
1976-1982	Normalización y consolidación
1980-	Justicia política (las primeras políticas de memoria)

Fuente: Antonio Costa Pinto (2002).

El primer periodo consistió en sanear los miembros que conducían la vida política portuguesa. Esto desde la muerte del dictador António de Oliveira Salazar<sup>14</sup>, a la cabeza del *Estado Novo* de 1932 a 1968, hasta la *Revolución de los Claveles*. Se condujeron saneamientos legales el primer año de la Revolución seguido por otro proceso u ola llamada “normalización y consolidación”. Esta fase fue marcada por la retirada de la presencia militar y la emergencia de nuevos partidos políticos más moderados. Permitió una consolidación democrática tal que, a principios de los años ochenta, “se habían resuelto la mayoría de los conflictos sobre medidas de ‘justicia política’” (Costa Pinto, 2002: 104). En el último proceso, la cristalización del proceso judicial se fundamentó. Fue emprendido los años anteriores a través de políticas públicas de memoria impulsadas por las “iniciativas de la sociedad civil, oficiales y privadas que han permitido a los portugueses mirar hacia atrás y desarrollar nuevas visiones e interpretaciones del “doble legado”. Es de carácter único con la seguida al autoritarismo del Estado Nuevo, un subsiguiente periodo revolucionario” (Costa Pinto, 2002: 105). De esta manera, Portugal se encargó de su *accountability* a mediados de los años ochenta, plenamente, cuando en España se condujo y seguía conduciendo políticas simbólicas y de reparación, conjuntamente. Algunas de las leyes promulgadas por los diferentes gobiernos españoles tienen vertientes judiciales como la llamada del gobierno socialista en 2010 sobre la confección de un mapa de las fosas comunes. Es un trabajo que se hizo conjuntamente con las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Euskadi, Extremadura y Andalucía, las únicas que han respondido al mensaje.

Durante los tres primeros años que siguieron la Revolución, se emprendieron de manera intensa políticas públicas de justicia en ruptura completa con el pasado dictatorial en

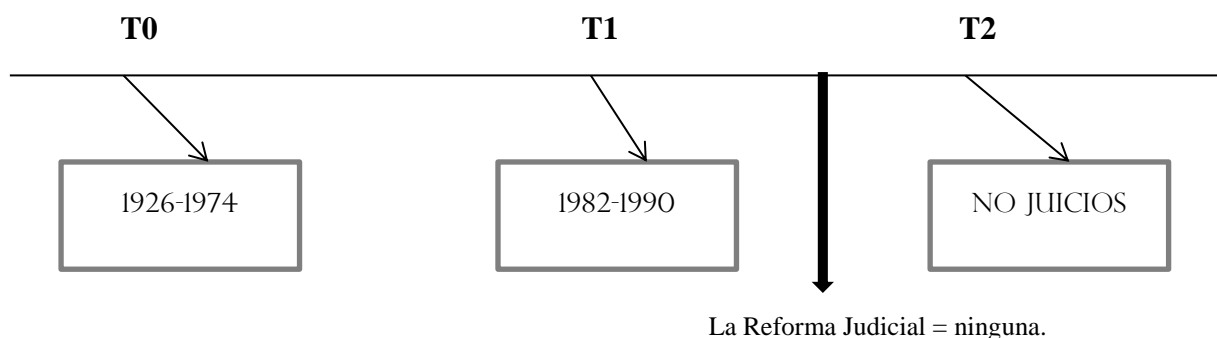
---

<sup>14</sup>La muerte de Antonio de Oliveira Salazar condujo a la puesta en marcha de la política de su heredero Marcelo Caetano, que retomó el poder a su muerte desde el 27 de Septiembre de 1968 hasta el 25 de Abril de 1974, fecha de su derrota emprendida por el General António de Spínola, iniciador de la Revolución de los Claveles.

Portugal [Cuadro 11]. En efecto, los miembros de la policía política, la Legión Portuguesa y la Guardia Nacional Republicana fueron encarcelados por los militares. Estos últimos encabezaron el golpe de Estado, el MFA o Movimiento de Fuerzas Armadas, mediante el liderazgo del General Antonio da Spínola. Esta ruptura fue dinamizada por la comunidad internacional y en particular los Estados Unidos<sup>15</sup> y la OTAN que financiaron al grupo para derrotar al antiguo régimen (Costa Pinto, 2002: 109). La creación del Tribunal Popular Humberto Delgado en 1975 tiene dos dimensiones. La primera, simbólica por ser representado por el hombre político portugués Humberto Delgado, persona arisca al régimen salazarista y asesinado por la policía portuguesa (PIDE) en España en 1965. La segunda, por haber condenado a colaboracionistas de manera activa en 1977 y 1978.

En Portugal la justicia postransicional fue mucho más desarrollada. El periodo transicional 1974-1976<sup>16</sup> fue muy activo en cuanto a los juicios designados. De la misma manera, el periodo postransicional 1982-1990 siguió las grandes olas de saneamientos. A día de hoy no hubo juicios o apertura de casos del régimen autoritario salazarista desde esta fecha. Las últimas medidas tomadas fueron políticas públicas de reparación y simbólicas entre el periodo 1990 y 1997; en ningún caso medidas de justicia.

#### CRONOLOGÍA II DE LA JUSTICIA ADAPTADA AL CASO PORTUGUÉS.



Fuente: Elaboración propia con base de Elen Skaar, ¿Puede la independencia judicial explicar la justicia postransicional, 2012. Pág. 27.

<sup>15</sup>“Los partidos políticos moderados fueron financiados por la administración norteamericana, que, junto con organizaciones internacionales de las “familias políticas” europeas – muchas veces haciendo de intermediarias de Estados Unidos – apoyaron también la formación de cuadros políticos.” (Costa Pinto 2002; 104).

<sup>16</sup>Las diferentes etapas de la transición portuguesa son desarrollada por Antonio Costa Pinto (2002) en BARAHONA DE BRITO, Alexandra; AGUILAR, Paloma; GONZALEZ ENRIQUEZ, Carmen (eds). Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: Ediciones Istmo, 2002 explicadas en la segunda parte de esta investigación. Parte II: Las clases de políticas públicas.

### *II-3.2. Hacia una justicia postransicional paralela.*

En este apartado, a continuación con lo que hemos visto en el apartado anterior, se tratará de explicar que a pesar de no tener una justicia postransicional, España últimamente vive una justicia paralela a la justicia institucional por familiares que desean y necesitan la Verdad. Sin embargo, es importante subrayar que desde la década de los ochenta, no existen más políticas públicas de memoria emprendidas en Portugal. La justicia postransicional portuguesa fue completa, en una cierta medida, tal que en este apartado se tratará únicamente del caso español.

En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón<sup>17</sup> decidió abrir una causa contra Franco y otros cuarenta y cuatro miembros de sus gobiernos por delitos contra Altos Organismos de la Nación. El 16 de octubre de 2008 en su Auto subraya que “los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española<sup>18</sup>”. De la misma manera, recordó que:

La categoría de crimen contra la humanidad parte de un principio básico y fundamental, que estas conductas agredan en la forma más brutal a la persona como perteneciente al género humano en sus derechos más elementales como la vida, la integridad, la dignidad, la libertad, que constituyen los pilares sobre los que se constituye una sociedad civilizada y el propio Estado de Derecho.

Ningún Gobierno u otro poder del Estado, especialmente el Judicial, pueden desconocer estos valores y principios que antes que estatales son humanos y que necesariamente se integran en el sistema de derecho interno, de ahí su obligatoriedad si no se quiere dar cobertura a la barbarie<sup>19</sup>.

Reunió todos los datos necesarios gracias a la Asociación de la Memoria Histórica y se contaron más de 114 266 desaparecidos del franquismo<sup>20</sup>. Algunos magistrados de la Audiencia Nacional apoyaron al juez, José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez mientras trece magistrados del colegiado de la Audiencia Nacional juzgaron al juez incompetente.

El 14 de mayo de 2010, el pleno del Consejo General del Poder Judicial decidió suspender en sus funciones Baltasar Garzón por delito de prevaricación. El 27 de febrero de 2012 fue absuelto por el Tribunal Supremo con seis votos contra uno. Es la primera vez en

---

<sup>17</sup>El País, La causa contra Garzón por la investigación del franquismo:

[http://elpais.com/elpais/2010/04/21/actualidad/1271837845\\_850215.html](http://elpais.com/elpais/2010/04/21/actualidad/1271837845_850215.html). Acceso: 18/05/2014.

<sup>18</sup>Auto del 16 de octubre de 2008. Apartado “Razonamientos jurídicos”. Artículo 1.

<sup>19</sup>Auto del 16 de octubre de 2008. Apartado “Razonamientos jurídicos”. Artículo 3.

<sup>20</sup>Ver Tabla 1: Los desaparecidos del franquismo por Comunidades Autónomas. Auto del 16 de octubre de 2008. Apartado “Razonamientos jurídicos”. Artículo 6.

España desde la transición que se escucharon a familiares de las víctimas<sup>21</sup>, un “juez ante la justicia<sup>22</sup>” que permitió abrir una brecha para el inicio de una justicia postransicional paralela, una hecha por la sociedad civil. Este proceso desarrolló olas de manifestaciones en apoyo al juez con la manifestación en Madrid en 2010. El mes de abril pasado, el exjuez pidió “que no se olviden las víctimas y crímenes del franquismo<sup>23</sup>”. En una entrevista dada a la Revista *Los Incorruptibles*, subraya que la “ley es igual para todos” y que “el presente, como el futuro, sólo puede construirse si el pasado está cerrado. Entonces, la sociedad podrá perdonar<sup>24</sup>.”

### *II-3.3. Distorsión entre realidad política y realidad ciudadana.*

Este apartado tiene como objetivo mostrar que hay una distancia bastante significativa entre la actuación de los entes políticos y las esperanzas de la ciudadanía cuanto a la implementación de un tipo de política pública de memoria, en particular, de justicia.

En España y en Portugal, las políticas simbólicas y de reparación tienen la misma importancia a nivel numérico. Sin embargo, notamos que en Portugal desde la transición hasta finales de los años ochenta, hubo un periodo llamado de “desfascitización” (Costa Pinto, 2002: 110) en el que se hicieron saneamientos y purgas tanto legales como ilegales (Costa Pinto, 2002: 112) anunciadas por los informes oficiales. De esta forma, podemos observar que el caso portugués es muy distinto del caso español en el sentido de que la justicia a través de políticas públicas fue al centro de la ruptura cuando en España, queda ausente. Además, muy pocos estudios se hicieron sobre las políticas públicas de memoria en Portugal en esta última década, lo contrario del caso español, cuya última Ley 52/2007 de Memoria Histórica fue muy criticada y sigue ser controvertida (Julia, 2011:1). Según Santos Juliá, se “ha implementado en España un modelo de impunidad<sup>25</sup>”. Por eso, en España se desarrollaron agrupaciones de familiares de las víctimas para buscar las fosas comunes y encontramos en la red sitios como el Mapa de la Memoria<sup>26</sup> en el que se catalogan los sitios en los que fallecieron las víctimas y en los que sus cuerpos siguen siendo no identificados. Un estudio

---

<sup>21</sup>Justicia Internacional y Franquismo. El caso contra Garzon: <http://casogarzon.blogspot.com.es/p/videos-con-las-sesiones-del-proceso.html>. Acceso: 18/05/2014.

<sup>22</sup> Título de un artículo especial sobre el juez Baltasar Garzón, El País; <http://www.elpais.com/especial/caso-garzon/>. Acceso: 18/05/2014.

<sup>23</sup>El Universo: <http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/12/nota/2697251/baltasar-garzon-pide-que-no-se-olviden-victimas-crimenes-franquismo> . 14/05/2014.

<sup>24</sup> Los Incorruptibles:

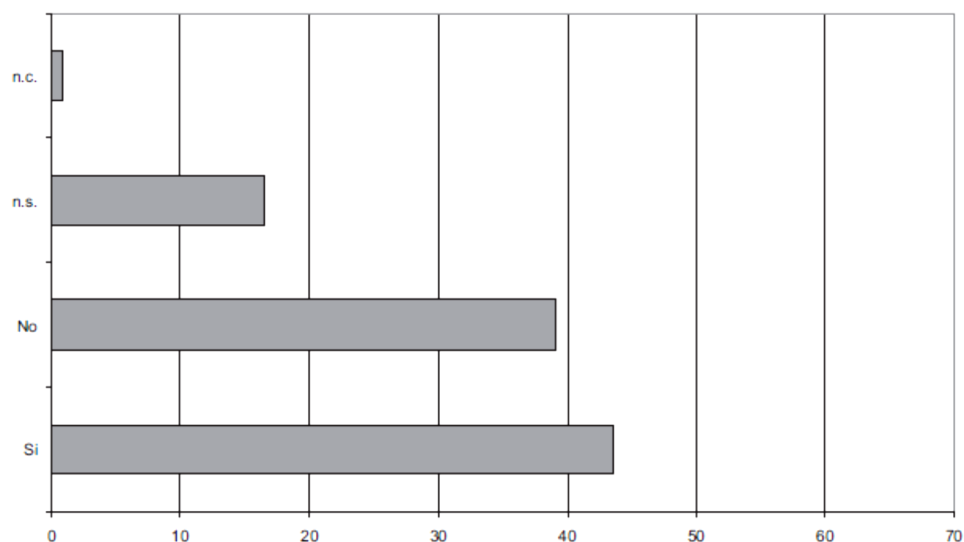
[http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201004/29/espana/20100429elpepunac\\_2\\_Pes\\_PDF.pdf](http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201004/29/espana/20100429elpepunac_2_Pes_PDF.pdf). 14/05/2014.

<sup>25</sup>Texto de su investigación para *Informe sobre la democracia española 2011*. Madrid, Fundación Alternativas, 2011, pp. 147-169.

<sup>26</sup>El Mapa de la Memoria: <http://www.mapadelamemoria.com/>. Acceso: 18/03/2014.

del CIS de 2011<sup>27</sup> muestra, sin embargo, que la población española está en favor de más justicia mediante la creación de una comisión de la Verdad aun lo vemos el porcentaje de “Si” no es tan elevado para contrastar con el “No”.

GRAFICO 1: CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE LA VERDAD.



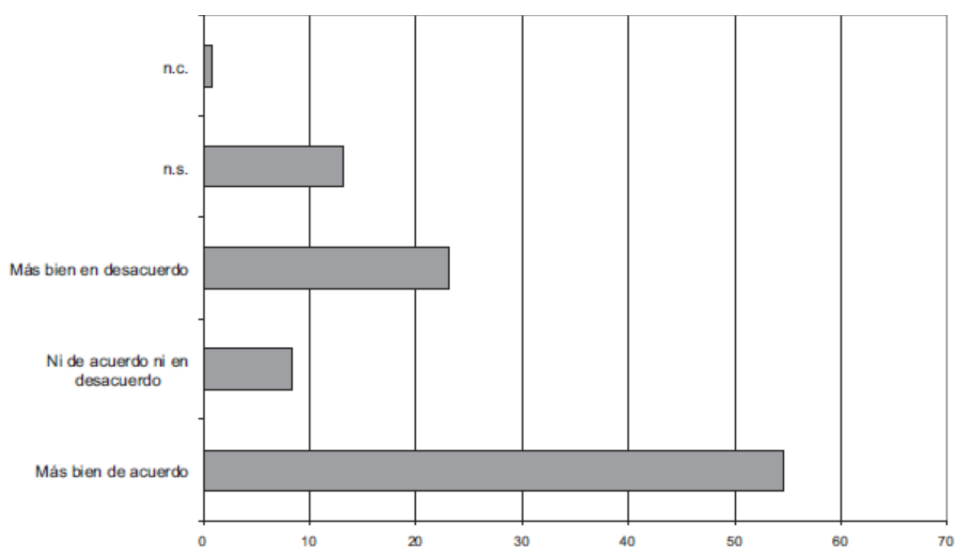
Fuente: CIS 2760.

El resultado de la encuesta del CIS de 2011 para la celebración de juicios es radicalmente claro, son más de 50 % los que piensan que es importante celebrar juicios con un porcentaje menor, de menos de 10% de “ni de acuerdo ni en desacuerdo” como lo vemos en el gráfico siguiente:

---

<sup>27</sup>AGUILAR. Paloma. Las actitudes de los españoles ante las medidas de justicia transicional relativas a la guerra civil y al franquismo. Revista Internacional de Sociología, vol 69, nº1, Enero-Abril, 59-90. 2011.

GRAFICO 2: CELEBRACIÓN DE JUICIOS.



Fuente: CIS 2760.

Es interesante ver que desde la transición no hubo estudios sobre la percepción ciudadana de la transición o de la justicia transicional en Portugal. De este modo, nos encontramos con un desequilibrio en las fuentes encontradas. Contamos con muchos estudios publicados para el caso español y muy pocos realizados en ciencias políticas sobre el periodo postransicional para el caso portugués. Esto puede explicarse, en gran parte, debido a que se hizo todo lo que fue posible. Es por eso, que no podemos comparar, a este nivel del estudio, con Portugal.

### **TERCERA PARTE: La introducción de dos dimensiones: el tipo consensual y el tipo por ruptura.**

En la parte anterior, hemos analizado las diferentes políticas públicas de memoria en España y Portugal atribuyéndolas una naturaleza según la clasificación de Juan Mario Solís Delgadillo: simbólica, de reparación y de justicia. En esta parte, la tercera y última, se tratará en un primer momento de explicar el proceso transicional en cada país: una transición por consenso en España y por ruptura en Portugal y de explicar lo que entendemos por estos dos términos. Al final, atribuiremos al conjunto de políticas públicas de memoria de cada país una dimensión: de tipo consensual y de ruptura según los criterios previamente expuestos<sup>28</sup>.

#### *III-1 La transición como instrumento de contenido.*

##### *III-1.1. La transición consensuada.*

El consenso se caracteriza por ser un conjunto de negociaciones y acuerdos entre diferentes frentes opuestos, acordándose sobre un objetivo único que contentaría a todos. Durante la transición española, el consenso se fundamentó en la reconciliación nacional y en la “institucionalización” de ésta (Aguilar Fernández, 1996:286). En (Míguez González, 1990: 243) se atribuye a España una transición por consenso o pactada. Según él, existen diferentes criterios que permiten afirmar el consenso en España [Cuadro 8]: la negociación entre los poderes facticos y el futuro gobierno, un proceso constituyente dirigido por este último y la continuidad de la Monarquía. Son tres criterios imprescindibles para hablar de consenso en España.

CUADRO 6: LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA.

<b>TRANSICION PACTADA</b>
Proceso de democratización
<ul style="list-style-type: none"><li>- Negociación : entre las élites franquistas y las democráticas</li><li>- Unidad de la oposición para negociar con mayor fuerza</li><li>- Negociación con los poderes facticos y con el Gobierno: Iglesia, el gobierno de Adolfo Suarez.</li></ul>
Gobierno del régimen
<ul style="list-style-type: none"><li>- Proceso constituyente dirigido por el Gobierno del régimen</li><li>- Aceptación de la Monarquía : nombramiento del Rey Juan Carlos I.</li></ul>

Fuente: Elaboración con base de la clasificación de Santiago Míguez González, La preparación de la transición a la democracia en España, 1990.

---

<sup>28</sup> Ver los cuadros 3 y 4 en la parte segunda de este trabajo.

La Constitución es el resultado de esta institucionalización del consenso en su “elaboración y su aplicación”<sup>29</sup>. La transición se hizo por arriba es decir por las élites dictatoriales y democráticas cuyo punto culminante fue el referéndum sobre la Ley para la Reforma política *¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?* el 15 de diciembre de 1976 aprobado por 94.17%. El objetivo era de “*satisfacer a todos aquellos que siguen considerando la evocación del pasado como algo crucial en sus vidas, mientras que por otra, se intenta adoptar, ante la ignorancia de lo que depararía el futuro, un tono más aséptico sobre la Guerra Civil que conduce a que, finalmente, se silencie su memoria*”. (Aguilar Fernández, 1996: 289) España, un país que vivió la Guerra Civil y que parecía andar en un camino violento.

La reconciliación nacional y la unidad que concedía la Constitución y Los Pactos, permitieron “*romper con una tradición ancestral de enfrentamientos civiles que solían atribuirse a la existencia de una especie de predisposición casi racial a la violencia y a la intransigencia*”. (Aguilar Fernández, 1996: 287). De esta manera, la Ley 46/1977 de Amnistía ganó “*la primera batalla (...) el transito pacifico de una dictadura a un régimen democrático*” (Aguilar Fernández, 1996: 300).

### *III-2 La transición como instrumento de rendición de cuentas.*

#### *III-2.2. La transición por ruptura.*

La ruptura está entendida según (Míguez González, 1990: 246) como un periodo de cambio y de instauración de la democracia con una fuerte confrontación y movilización para incorporar un nuevo aparato de Estado y nuevos componentes y actores democráticos. En (Míguez González, 1990: 243) se atribuye a Portugal una transición por ruptura simple o pura. Según él, existen diferentes criterios que permiten afirmar esta ruptura en Portugal [Cuadro 7]: la negociación entre los poderes facticos y el futuro gobierno, un proceso constituyente dirigido por este último y la continuidad de la Monarquía. Son tres criterios imprescindibles para hablar de consenso en España.

---

<sup>29</sup>Aguilar Fernández, Paloma, *Memoria y Olvido de la Guerra Civil española*, Alianza Editorial, 1996. “Nunca un texto constitucional había suscitado un acuerdo tan generalizado y nunca antes había sido aprobado mediante un referéndum popular” (Aguilar Fernández: 1996; 287).



CUADRO 7: LA TRANSICIÓN PORTUGUESA.

<b>RUPTURA SIMPLE O PURA</b>	
Momento de cambio- democracia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confrontación, movilización y negociación: MFA y movimientos de estudiantes en mayoría.</li> <li>- Unidad de la oposición para imponer el Gobierno Provisional y la ruptura: MFA y líder Antonio da Spínola.</li> <li>- Negociación con los poderes facticos (Ejercito, Iglesia, Finanzas...)</li> </ul>	
Gobierno Provisional formado por la oposición política: Gobierno de Antonio da Spínola.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso constituyente dirigido por el Gobierno Provisional</li> <li>- Consulta sobre la forma del Estado y de Gobierno: pasar de un régimen autoritario a un régimen semi-presidencial.</li> </ul>	

Fuente: Elaboración con base de la clasificación de Santiago Míguez González, La preparación de la transición a la democracia en España, 1990.

El golpe de Estado del Movimiento de Fuerzas Armadas portuguesas simboliza esta ruptura poniendo un fin al régimen autoritario y conduciendo la transición instaurando purgas y saneamientos tanto en la vida política portuguesa como en la sociedad en general para fomentar el cambio. En los términos de Santiago Míguez González, es una ruptura pura por diferentes razones. La primera, el MFA fue el actor principal de esta confrontación y de las negociaciones para el cambio y, fue Antonio de Spínola, líder del movimiento que condujo el Gobierno Provisional portugués desde el 25 de abril de 1974 hasta el 30 de septiembre de 1974. Instauró la Junta de Salvación Nacional y condujo los primeros meses de la transición. Su papel fue esencial en este periodo transitorio dado que instaló la primera etapa de juzgamientos legales o de justicia revolucionaria (Costa Pinto, 2002: 103). De esta manera, “el programa de ruptura incluía, en primer lugar, como elemento central, el objetivo de que el proceso de transición fuese gestionado directamente por la oposición” (Míguez González, 1990: 243).

De esta forma, destacamos dos puntos esenciales que diferencian a España y a Portugal. El primero, al establecer un gobierno transicional, la naturaleza de la transición es diferente. En España se creó un nuevo gobierno a partir del antiguo como continuo institucional de la Monarquía, por eso “La sustitución de Arias Navarro por Adolfo Suárez como presidente del Gobierno introdujo un cambio en el impasse político del postfranquismo, consistente en el desarrollo de una estrategia de democratización a través de reformas legales que fueron incluyendo una amplia amnistía política” (Maravall, 1981: 173). El segundo punto, en Portugal, el gobierno provisional se basa en la oposición política a través de una consulta sobre la forma del Estado y del gobierno para crear en fin un régimen semi-presidencialista.

### *III-3 Las políticas públicas de memoria o el espejo de la transición.*

#### *III-3.1. Las políticas públicas consensuales.*

A partir del tipo de transición previamente estudiado, podemos destacar dos tipos de políticas públicas de memoria. Como lo comprendemos, la transición adoptada por un país influye en el tipo de políticas públicas de memoria emprendidas.

**En España**, como lo hemos visto en la primera parte de este trabajo, privilegió las políticas públicas simbólicas y de reparación con una ausencia de políticas públicas de justicia. Asimismo, Portugal emprendió políticas públicas simbólicas y de reparación pero también anduvo en un camino judicial intenso: una diferencia crucial entre los dos países.

Llamamos las políticas públicas consensuales aquellas que se fundamentan en el olvido de un pasado traumatizante y doloroso. Por consecuencia, se oculta parcialmente o totalmente la verdad creando una memoria común – o memoria gubernamental e institucional- es lo que representa la Ley 52/2007 de Memoria Histórica (Santos Julia, 2011: 2). Por eso, las políticas públicas consensuales son aquellas políticas públicas, desde la transición hasta nuestros días, cuya naturaleza y objetivo no es de juzgar en toda forma y por eso buscar la verdad sino de convenir de una memoria para todos fundamentándose en el olvido parcial de la historia [Cuadro 8].

#### *III-3.2. Las políticas públicas de ruptura.*

De la misma forma, las políticas públicas de ruptura niegan todos los puntos previamente enunciados y restauran la verdad y la justicia en batalla contra la impunidad. Por eso, las políticas públicas por ruptura son aquellas políticas públicas, desde la transición hasta nuestros días, cuya naturaleza y objetivo es de resarcir una memoria pasada buscando la verdad; y no crear una nueva fundamentándose en una justicia sistemática, continúa e intensa.

**En Portugal**, desde la Revolución de la Claveles el 25 de abril de 1974, se han combinado políticas públicas simbólicas y de reparación con las de justicia. Las políticas de reparación suelen ser de consenso así que el objetivo es de contentar a las víctimas mediante indemnizaciones o prestaciones. Las políticas simbólicas tienen por objetivo resarcir la memoria, en una cierta medida, combatir el olvido e imponer la verdad. Sin embargo, no pueden entrar en la dimensión ruptura así que lo que caracteriza esta dimensión es la justicia. Las políticas públicas de justicia por juzgar, es decir convenir del juzgamiento de los culpables y ayudar por eso a las víctimas castigándolos, crean una ruptura y se alejan completamente del camino de la impunidad. Por eso, las políticas públicas de justicia se

ubicar en la dimensión ruptura. La ausencia de justicia es el rasgo principal y el núcleo de una ruptura porque se ocupa de las dos partes en conflicto y no únicamente de una. Además, la justicia es uno de los criterios principales de una democracia sana y respetable (Rubio, 2014). Para España, la transición fue el momento de la reconciliación y por eso la puesta en marcha de políticas públicas simbólicas y de reparación pero no de justicia porque la Ley 46/1977 de Amnistía no preveía el juzgamiento de los culpables del régimen sino de silenciar el pasado para crear el futuro. De esta manera, el caso español se caracteriza por tener políticas públicas de memoria a dimensión consensual a la imagen de su ruptura pactada y de los Pactos de la Moncloa, lo contrario del caso portugués, que se caracteriza por tener políticas públicas de memoria de ruptura.

CUADRO 8: CRITERIOS PARA DIFERENCIAR LA CLASE DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE MEMORIA: UNA VERTIENTE DIMENSIONAL

Indicadores	
Por consenso	Por ruptura
Olvido	Ausencia de olvido
Ausencia de Justicia	Presencia de justicia
Memoria común creada	Memoria pasada privilegiada
Verdad parcial	Verdad completa

Fuente: Elaboración propia con base de Alexandra Barahona de Brito (2002).

El consenso se caracteriza por contentar a diferentes partes dentro de una sociedad generalmente fragmentada por la pluralidad de las memorias y de la confrontación entre éstas (Solís Delgadillo, 2012: 26). Las políticas públicas de memoria están definidas por el objetivo mismo de las transiciones (Elster, 2006 y Stabili, 2008).

**En España**, el objetivo fue de reconciliar a una sociedad fragmentada a través del olvido parcial de la Historia. Por eso, las políticas simbólicas y de reparación en ningún caso se pueden considerar rupturistas salvo si están acompañadas de políticas de justicia. En este sentido, las políticas públicas de memoria en España son consensuadas.

En adecuación con los criterios anteriormente expuestos, en España se implementaron únicamente políticas públicas simbólicas y de reparación. Éstas tienen como objetivo, lo hemos visto en la segunda parte de este análisis, resarcir la memoria y reparar a las víctimas y familiares. La Ley de Amnistía 46/1977 es un punto final que no permite juzgar a los transgresores de los derechos humanos. Cristalizó (1) el olvido, (2) la ausencia de justicia y fomentó la creación de (3) una memoria institucional cuyo punto culminante fue la Ley de

Memoria Histórica de 2007. Esto llevó a (4) un ocultamiento de la Historia porque deja al lado otra parte de la verdad.

**En Portugal**, al revés, se emprendieron a la vez políticas simbólicas, de reparación y de justicia. Notamos que estas últimas fueron las primeras en estar implementadas y fueron radicales en su aplicación (Costa Pinto, 2002: 103) dado que existieron muchas purgas ilegales de las élites. La combinación de los tres tipos de políticas públicas condujo a una transición rupturista. Hay (1) una ausencia de olvido porque se juzgaron a los instigadores de los crímenes del pasado, de esta manera, (2) no deja a nadie la oportunidad de crear otra memoria sino aquella construida durante la transición. Además, existió (3) una justicia rigurosa y constante durante la transición que asintió (4) la verdad. Lo vemos, hoy en día, muy pocos estudios se hacen sobre el periodo postransicional portugués. Las últimas obras en la materia del Estado portugués por cerrar este periodo remontan al año 1996 con el traslado de los documentos del dictador Salazar en el Archivo Nacional y con la última reparación prestacional conducida por el gobierno socialista de Jorge Sampaio en 1997. En este sentido, las políticas públicas de memoria en Portugal son rupturistas.

El debate en torno a las políticas públicas de memoria en España y Portugal, y de manera más general en otros países, se centra en si las políticas públicas simbólicas y de reparación son suficientes o si es necesario que se añaden políticas de justicia. El caso español es ejemplar en este sentido. Los distintos gobiernos instalaron políticas simbólicas y de reparación cuando actualmente la sociedad civil grita por la justicia. En Portugal, a su vez, combinó en un periodo muy corto, el periodo transicional 1974-1976, políticas simbólicas, de reparación y de justicia. Una prueba de que es esencial para una democracia, además cuando sea joven y débil, no excluir la tercera fase de la transición: la justicia. Una transición rigurosa en materia de justicia asegura así un futuro sereno en el cual la justicia es una condición necesaria y suficiente para la reconciliación nacional.

## Conclusiones

A partir del análisis descriptivo y explicativo de las políticas públicas de memoria en España y Portugal clasificándolas según tres categorías: simbólicas, de reparación y de justicia, se puede notar que estas políticas fueron emprendidas en ambos países pero en momentos distintos. España emprendió políticas simbólicas y de reparación a lo largo de su transición y consolidación democrática hasta nuestros días, Portugal concentró sus políticas durante el periodo transicional de 1974 a 1982. Además, notamos que se iniciaron muchas políticas simbólicas y de reparación en España pero ninguna de justicia, un rasgo diferencial muy importante a la hora de comparar ambos casos.

Este *hecho diferencial*<sup>30</sup> puede explicarse por el tipo de transición que vivió cada uno de estos países. España adoptó una transición por consenso que se basó en la reconciliación nacional y en el olvido cristalizándose a través de la Ley de Amnistía 46/1977. Ésta pone un “punto final” a quien quiera juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Asimismo, los distintos gobiernos intentaron debilitar un descontentamiento de la sociedad civil a través de políticas públicas simbólicas y de reparación para alejarse de la vía de la verdad y de la justicia. Últimamente, y lo hemos visto en la parte segunda de esta investigación, se abrió una brecha para aplicar el principio de justicia universal y parar esta violación a través del caso Baltazar Garzón en 2008. De esta manera, podemos ver que durante un proceso transicional, no son suficientes las políticas simbólicas y de reparación sino que hay que concentrarse también en las de justicia. Si el problema no está presente en un momento, saldría en otro: tarde o temprano.

Su vecino, Portugal adoptó otro lema: la ruptura. Cuando el Movimiento de las Fuerzas Armadas entró en la Praça do Comércio el 25 de Abril de 1974, se perfiló una revolución que rompería con el pasado y sin violencia. La historia actual de Portugal en materia de justicia transicional y postransicional es meramente vacía, en el sentido de que, durante la transición se hicieron muchas purgas y saneamientos desde arriba hasta abajo. Quizás sea el resultado de un cumplimiento total de su proceso rupturista.

Estos dos caminos transicionales condujeron a la implementación de dos tipos de políticas públicas de memoria: las consensuadas y las de ruptura.

---

<sup>30</sup>Expresión usada por Eliseo Aja en *El Estado autonómico: Federalismo y hechos diferenciales*. Alianza Editorial. 2007.

Hasta ahora, ningún estudio recopila y analiza las políticas públicas de memoria en España y Portugal. Este análisis permite dar a conocer los compromisos de cada Estado en materia de justicia y memoria a fin de ver los éxitos y fallos en el ámbito de la justicia transicional y postransicional. En continuidad con este estudio, sería relevante en una futura investigación analizar los factores que incidieron en la naturaleza de las políticas públicas de memoria en España y Portugal. Por ejemplo, tomar en consideración la importancia del contexto pre-régimen autoritario y pre-transición – hecho traumatizante, previa experiencia democrática; el tipo de destitución del régimen autoritario – por muerte del líder o por golpe de estado; el actor principal de la caída del régimen – un actor dentro o fuera de la ciudadanía (élites, movimientos, fuerzas paramilitares) – así que la importancia del entorno regional.

*“Pienso que la democracia debe ser obra de todos los ciudadanos y nunca obsequio, concesión u imposición; cualquiera que sea el origen de ésta.”<sup>31</sup>*

---

<sup>31</sup> Mensaje del 10 de Septiembre de 1976 sobre la Ley para la Reforma Política. Fundación Transición española: [http://www.transicion.org/Destacados\\_flash/EspecialAdolfoSuarez/EspecialAdolfoSuarez.html](http://www.transicion.org/Destacados_flash/EspecialAdolfoSuarez/EspecialAdolfoSuarez.html). Acceso: 13/05/2014.

## Bibliografía

- AJA, Eliseo. El Estado autonómico: Federalismo y hechos diferenciales. Alianza Editorial. 2007.
- ALVAREZ CHINCHON, Javier. *El viaje a ninguna parte*: Memoria, leyes, historia y olvido sobre la guerra civil y el pasado autoritario en España. Un examen desde el derecho internacional. Revista IIDH. Vol.45. 2007:120-233.
- ALVAREZ CHINCHON. La investigación de los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo como delito de prevaricación. Análisis crítico del Auto del Tribunal Supremo de 3 de Febrero de 2010 desde la perspectiva del derecho internacional. Revista electrónica de estudios internacionales. 2010: 19-43.
- AGUILAR FERNANDEZ, P; BALCELLS, L y CEBOLLA, H. Determinants of attitudes towards transitional justice: An empirical analysis of the Spanish case. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. 2009.
- AGUILAR FERNANDEZ, Paloma. Memoria y olvido de la Guerra Civil española. Madrid: Ediciones Alianza Editorial, 1996.
- AGUILAR FERNANDEZ. Paloma. Las actitudes de los españoles ante las medidas de justicia transicional relativas a la guerra civil y al franquismo. Revista Internacional de Sociología, vol 69, n°1, Enero-Abril, 59-90. 2011.
- AGUILAR FERNANDEZ, Paloma. Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada Madrid: Alianza Editorial: 2008.
- BARAHONA DE BRITO, Alexandra; AGUILAR, Paloma; GONZALEZ ENRIQUEZ, Carmen (eds). Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: Ediciones Istmo, 2002.
- BARRETO, António. “Reforma agrária e revolução em Portugal (1974-1976)”, en Portugal. O sistema político e constitucional, 1974-1987, coord. Mário Baptista Coelho, Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 1989, pp.453-468.
- BASABE, N y HERRANZ, J.K. Identidad nacional, ideología política y memoria colectiva. Psicología Política, N° 18, Universidad del País Vasco. 1999, 31-47
- BONO LAHOZ, María Jesús. Políticas públicas de memoria en el Estado español. Barcelona, I Col · loqui Internacional Memorial Democratic: Politiques Publiques de la Memoria. 2007.
- CASAS PARDO, José. La transición política española a la democracia. Un enfoque de Public Choice. Historia contemporánea. n°27.Universidad de Valencia. 2003:869-906.
- CALVEIRO, Pilar “Memoria, política y violencia”. En LORENZANO, Sandra y BUCHENHORST, Ralph (eds.) Políticas de la memoria. Tensiones en la palabra y la imagen, Argentina. Buenos Aires: Editorial Gorla-Universidad del Claustro de Sor Juana. 2006: 53-62.
- CALVEIRO, Pilar. Los usos políticos de la memoria. Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. 2006: 359-382.

- CHILCOTE, R. A Revolução portuguesa do 25 de Abril de 1974. Bibliografía anotada, Coimbra, C.D. 25 de Abril, Universidad de Coimbra, 1987.
- COLLINS, Cath. Human Rights Trials in Chile during and after ‘Pinochet’s Years’. The International Journal of Transitional Justice. Oxford University Press, 2009: 1–20.
- CORKILL, David. The Portuguese Economy since 1974, Edimburgo, Edimburg’s University Press, 1993.
- DE KOSTKA FERNANDEZ, Estanislao (2004) Políticas públicas. Madrid: Universidad Complutense de Madrid: Disponible en:  
[http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/P/politicas\\_publicas\\_b.htm](http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/P/politicas_publicas_b.htm)
- DEL AGUILA, Rafael; MONTORO, Ricardo. El discurso político de la transición española. CIS. Madrid: Ediciones Siglo Veintiuno de España, sa, 1984.
- DOMINGO, Pilar. Judicialization of Politic or Politization of Judiciary? Recent Trends in Latin America. *Democratization*, 2004, vol.11 (1): 104-126.
- DUTRENIT BIELOUS, Silvia. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reacciones estatales. México y Uruguay ante los delitos del pasado. Revista América Latina Hoy, nº 61. Ediciones Universidad de Salamanca, 2012: 79-99.
- GRAHAM, Lawrence S. The Portuguese Military and the State. Rethinking Transition in Europe and Latin America, Boulder, Oxford, Westview Press Inc., 1993.
- HARVEY, Robert. Portugal Birth of Democracy, Londres, Macmillan Press, 1978.
- JIMENEZ, Juan Carlos. España y Portugal en transición. Los caminos a la democracia en la Península Ibérica. Silex. Madrid. 2009.
- JULIA, Santos. *Informe sobre la democracia española 2011*. Madrid, Fundación Alternativas, 2011, pp. 147-169.
- JULIA, Santos. 2006. “El franquismo: Historia y memoria”, *Claves de la Razón Práctica*, nº159, págs. 4-13.
- JULIA, Santos. Los nombres de la guerra. UNED Madrid: 2009: 15-38.
- JULIA, Santos. Víctimas del terror y de la represión. Enrique Fuentes Quintana, dir. y Francisco Comín, coord. *Economía y economistas españoles durante la Guerra Civil*. Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2008, vol. II, pp. 385-410.
- ELSTER, Jon (2006) Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica. Buenos Aires: Katz Editores.
- ENNES FERREIRA, Manuel. Angola-Portugal. Do espaço económico português às relações pós-colónias, Lisboa, Escher, 1990.
- FERNANDEZ MARTIN, F. Exhumaciones y políticas de la memoria en la España contemporánea. Revista de Historia Contemporánea, nº7. 2007.
- FERREIRA, José Madeiros. Portugal en transición. Fondo de Cultura Económica. 2000.



- FISHMAN, R. Labour and the return of Democracy to Spain. The Helen Kellogg Institute For International Studies. 1989.
- FISHMAN, R. Rethinking State and Regime: Southern Europe's Europe Transition to Democracy. Cambridge University Press. 2010:423-440.
- GONZALEZ VEGA, J. Memoria histórica: ¿Se puede juzgar la historia? Fundación Antonio Carretero. Madrid. 2009.
- GONZALEZ QUITANA, A. La política archivística del gobierno español y la ausencia de gestión del pasado desde el comienzo de la transición. Revista de Historia Contemporánea, nº7. 2007.
- LINZ, Juan J. 2000 Totalitarian and Authoritarian Regimes, Rienner.
- LINZ, Juan J. y STEPAN. The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1978
- LINZ, Juan J. y STEPAN. Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1996
- LINZ, Juan J. Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid: 2009.
- MADEIROS FERREIRA, J. Portugal en transición, FCE, México, 2000.
- MARAVALL, José María. La política de la transición. Taurus. Madrid. 1981.
- MARTIN BERISTEIN, Carlos. Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2009
- MIGUEZ GONZALES, Santiago. La preparación de la transición a la democracia en España. Prensas Universitarias de Zaragoza, 1990.
- MONTESPERELLI, Paolo (2003 [2005]) Sociología de la memoria. Buenos Aires: Nueva Visión.
- MARTINEZ BARAHONA, Elena; GUTIERREZ SALAZAR, Martha Liliana; RICON FONSECA, Liliana. Impunidad en el Salvador y Guatemala: "De la locura a la esperanza: ¿Nunca Más?". Revista América Latina Hoy, nº 61. Ediciones Universidad de Salamanca, 2012: 101-136.
- NAPOLI, Bruno (2011) "Memoria, verdad y justicia: nociones de una justicia institucional". En ANDREOZZI, Gabriele (coord.). Juicios por crímenes de lesa humanidad. Buenos Aires: Cara o Ceca, pp. 65-76.
- O'DONNELL, Guillermo, SCHMITTER, Philippe y WHITHEAD, Lorenz (1986 [1988]) Transiciones desde un gobierno autoritario. Buenos Aires: Prometeo.
- ORTEGA Y GASSET, José. España Invertebrada. 1921.

- PARSONS, Wayne (2007) Políticas públicas: una introducción a la teoría y a la práctica del análisis de políticas públicas. Mexico, D.F.: FLACSO.
- PION-BERLIN, David y ARCENEUX, Craig. tipping the Civil-Military Balance. Institutions and Human Rights Policy in Democratic Argentina and Chile. *Comparative Political Studies*, 1998, vol. 31 (5): 633-661.
- PIPER SHAFIR, Isabel (2007) Políticas del recuerdo y la construcción del sujeto víctima. Barcelona: I Col • loqui Internacional Memorial Democratic: Politiques Publiques de la Memoria.
- PIRES LEMOS, Mário. Descolonização de Timor. Missao impossível?, Lisboa, D.Quixote, 1991.
- RONIGER, Luis. La sacralización del consenso nacional y las pugnas por la memoria histórica y la justicia en el Uruguay posdictatorial. *Revista América Latina Hoy*, n° 61. Ediciones Universidad de Salamanca, 2012: 51-78.
- RUBIO PADILLA, Sonia. ¿Inclinando la balanza judicial? La paradoja de la selección judicial en América Latina Realizado por Sonia Rubio Padilla. Universidad de Salamanca. 2014: 1-44.
- SANCHEZ CERVELLO, Josep. La revolución portuguesa y su influencia en la transición española (1961-1976). NEREA. Madrid. 1995.
- SIEDER, Rachel (2002) "Políticas de guerra, paz y memoria en América Central". En BARAHONA DE BRITO, Alexandra; AGUILAR FERNANDEZ, Paloma y GONZALEZ ENRIQUEZ, Carmen [eds.] Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones y olvido en las nuevas democracias. Madrid: Istmo, pp. 247-284.
- SKOCPOL Theda (1985) "Bringing the State Back In: Strategies for Analysis in Current Research.". En EVANS, Peter; RUESCHEMEYER, D. y SKOCPOL, Theda. Bringing the State Back In. Nueva York: Cambridge University Press, pp. 3-43.
- SKAAR, Elin. Judicial Independence and Human Rights in Latin America: Violations, Politics, and Prosecution. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- SKAAR, Elin. ¿Puede la independencia judicial explicar la justicia postransicional. *Revista América Latina Hoy*, n° 61. Ediciones Universidad de Salamanca, 2012: 15-49.
- SOLIS DELGADILLO, Juan Mario. Memoria democrática y olvido político: la gestión gubernamental de las políticas de memoria en Chile y Argentina. Universidad de Salamanca, 2012.
- STABILI, Maria Rosaria (2008) Le verità ufficiali. Transizioni politiche e diritti umani in America Latina. Roma: Edizioni Nouva Cultura.
- TEITEL, Ruti. G. Transitional Justice Genealogy. *Harvard Human Rights Journal*, 2003, vol.16: 69-94.
- TODOROV, Tzvetan (2002) Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX. Barcelona: Ediciones Península.

TRAVERSO, Enzo (2007a) El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política. Madrid: Marcial Pons.

VEZZETTI, Hugo (2009) Sobre la violencia revolucionaria. Buenos Aires: Siglo XXI.

WILHEM HEIMER, Franz. O processo de descolonização em Angola, 1974-1976, Lisboa, A Regra do Jogo, 1980.

## Páginas de Internet

Los Pactos de la Moncloa, Colección Informe 17.

[http://www.mpr.gob.es/servicios/publicaciones/vol17/pag\\_00.html](http://www.mpr.gob.es/servicios/publicaciones/vol17/pag_00.html)

Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo:

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/rd1891-2004.html#a1](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1891-2004.html#a1).

ORDEN CUL/3190/2008, de 6 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de octubre de 2008, por el que se dictan instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes: [https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-17963](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-17963).

Ley 46/1977 de Amnistía española.

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura: [http://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22296](http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22296).

El Gobierno no retira monumentos franquistas por motivos económicos pero repara el Valle de los Caídos: <http://www.publico.es/politica/455816/el-gobierno-no-retira-monumentos-franquistas-por-motivos-economicos-pero-repara-el-valle-de-los-caidos>.

Un museo en honor del dictador Salazar provoca la ira de los antifascistas portugueses: <http://gara.naiz.info/paperezkoa/20070311/7493/es/Un/museo/honor/dictador/salazar/porovoca/ira/antifascistas/portugueses>.

El Mapa de la Memoria: <http://www.mapadelamemoria.com/>

Baltasar Garzón. Un hombre que arrestó al presidente. Los Incorruptibles. 37-43

Memorias de la guerra civil y del franquismo. Estudio nº2.760. Abril 2008. Centro de Investigaciones Sociológicas.

JULIA, Santos. Las trampas de la memoria. El País. 14/10/2006.

Justicia Internacional y Franquismo. El caso contra Garzón: <http://casogarzon.blogspot.com.es/p/videos-con-las-sesiones-del-proceso.html>.

## Índice de cuadros y tablas.

Cuadro 1: Los tipos de políticas públicas de memoria.	15
Cuadro 2: Los tipos de ruptura.	16
Cuadro 3: Un aspecto dimensional.	16
Cuadro 4: Criterios para diferenciar la clase de las políticas públicas de memoria: un aspecto dimensional.	17
Cuadro 5a: Para la reconciliación y el olvido (España)	24
Cronología III general de la justicia adaptada al caso español.	24
Cuadro 5b: Para la Verdad y Contra la Impunidad (Portugal)	25
Cronología II de la justicia adaptada al caso portugués.	26
Grafico 1: Creación de una Comisión de la Verdad.	29
Grafico 2: Celebración de juicios.	30
Cuadro 6: la transición española.	31
Cuadro 7: la transición portuguesa.	33
Cuadro 8: Criterios para diferenciar la clase de las políticas públicas de memoria: una vertiente dimensional.	35
Cuadro 9: Políticas de memoria en España.	46
Cuadro 10: Políticas de memoria en Portugal.	48
Cuadro 11: Una justicia sin el poder judicial: La desfascitización y periodo de justicia transicional: 1974-1976.	49
Tabla 1: Los desaparecidos del franquismo por CCAA.	51

## Anexos.

CUADRO 9: POLÍTICAS DE MEMORIA EN ESPAÑA.

GOBIERNO	FECHA	POLITICA Y/O MEDIDA	INICIATIVA	TIPO DE POLITICA PUBLICA	DIMENSION
Adolfo Suarez (UCD)	1977	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 46/1977 de Amnistía (política de reconciliación nacional” in Paloma Aguilar (2002)</li> <li>- voluntad del olvido (reformular y no romper) : vaciar las prisiones de los presos políticos de la oposición</li> <li>- “ley de punto final” para aquellos que participaron al régimen anterior</li> </ul>	Gubernamental	Simbólica	Consenso
Adolfo Suarez (UCD)	1979	Ley 5/1979 : reconocimiento de pensiones a los familiares de los españoles fallecidos durante la Guerra Civil	Gubernamental	Reparación económica	Consenso
Adolfo Suarez (UCD)	1980	Ley 35/1980: reconocimiento de pensiones a mutilados del Ejército de la República	Gubernamental	Reparación prestacional	Consenso
José Luis Zapatero (PSOE)	2004	Real-Decreto 1891/2004, de 10 de Septiembre: por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.	Gubernamental	Simbólica	Consenso
José Luis Zapatero (PSOE)	2005	Orden de Presidencia del 16/12/2005 : convocatoria de subvenciones para las exhumaciones de las fosas comunes	Gubernamental	Reparación	Consenso

José Luis Zapatero (PSOE)	2006	Ley 24/2006 Año de la memoria histórica o Ley de Compensación (Santos Juliá)	Gubernamental	Simbólica	Consenso
José Luis Zapatero (PSOE)	2007	Ley 52/2007 Ley de memoria histórica	Gubernamental	Simbólica	Consenso
José Luis Zapatero (PSOE)	2008	Orden CUL/3190/2008: instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los Bienes de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes	Gubernamental	Simbólica	Consenso
José Luis Zapatero (PSOE)	2010	Orden Presidencial 786/2010: convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo	Gubernamental	Reparación prestacional	Consenso
José Luis Zapatero (PSOE)	2010	El Ministerio de justicia firma un convenio con siete CCAA (Cataluña, Aragón, Euskadi, Extremadura y Andalucía) para confeccionar un mapa de fosas	Gubernamental	Justicia	Consenso

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de Juan Mario Solís Delgadillo (2012) y Alexandra Barahona de Brito (2002).

CUADRO 10: POLÍTICAS DE MEMORIA EN PORTUGAL.

GOBIERNO	FECHA	POLITICA Y/O MEDIDA	INICIATIVA	TIPO DE POLITICA PUBLICA	DIMENSION
Francisco da Costa Gomes (Partido Independiente)	A partir de 1975	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio del nombre de las calles</li> <li>- se quita el nombre de “Salazar” en los lugares y monumentos</li> <li>- honrar figuras de la oposición</li> <li>- exposiciones o “lugares de memoria”</li> </ul>	MFA o Movimiento de Fuerzas Armadas compuesto por el ejército (organización ilegal en reacción a un Decreto-ley bajo el régimen salazarista)	Simbólica	Consenso
Francisco da Costa Gomes (Partido Independiente)	A partir de 1975	Intentos de compensar a los militantes que lucharon contra la dictadura	MFA o Movimiento de Fuerzas Armadas	Reparación	Consenso
Mario Soares (Primer mandato 1986-1991) (Partido Socialista)	1990	Honores militares al General Humberto Delgado y a otros	Gubernamental	Simbólica	Consenso
Mario Soares (Segundo mandato 1991-1996) (Partido Socialista)	1996	Documentos de Salazar en el Archivo Nacional	Gubernamental	Simbólica	Consenso
Jorge Sampaio (Primer mandato 1996-2001) (Partido Socialista)	1997	Ley 20 de 19 de Junio: Compensación efectiva de los militantes (pago de prestaciones de la seguridad social y pensiones)	Gubernamental	Reparación de tipo prestacional	Consenso

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de Juan Mario Solís Delgadillo (2012) y Alexandra Barahona de Brito (2002).



**CUADRO II: UNA JUSTICIA SIN EL PODER JUDICIAL: LA DESFASCITIZACIÓN Y  
PERIODO DE JUSTICIA TRANSICIONAL: 1974-1976.**

<b>GOBIERNO</b>	<b>FECHA</b>	<b>POLITICA Y/O MEDIDA</b>	<b>INICIATIVA</b>	<b>TIPO DE POLITICA PUBLICA</b>	<b>DIMENSION</b>
Antonio de Spínola y Francisco da Costa Gomes (Partido Independiente)	1974-1976	- Encarcelamiento de agentes de la Legión Portuguesa y policía política (especialmente PIDE/DGS) - GNR o Guardia Nacional Republicana	MFA Y Movimientos sociales	Justicia	Ruptura
Antonio de Spínola y Francisco da Costa Gomes (Partido Independiente)	1974-1975	Apoyo a las fuerzas armadas de centro izquierda y derecha y financiación	Comunidad internacional (especialmente EEUU)	Justicia	Ruptura
Antonio de Spínola y Francisco da Costa Gomes (Partido Independiente)	1975	Creación Tribunal Popular Humberto Delgado	Gubernamental	Justicia	Ruptura
Francisco da Costa Gomes (Izquierda e izquierda radical)	1975 (año del intento de golpe de estado de Spínola) – el verano caliente-	Ligeras y rápidas depuraciones en las Fuerzas Armadas	Acuerdo entre el Movimiento de Fuerzas Armadas y de la Junta de Salvación Nacional (MFA y la JNS)	Justicia	Ruptura
Antonio Ramalho Eanes (PRD)	1976	Purgas y saneamientos en el MFA	Gubernamental	Justicia	Ruptura
Antonio de Spínola y Francisco da Costa Gomes (Partido Independiente)	Siempre entre 1974-1976	Creación comisión Interministerial (para cada ministerio pero de forma desigual) de Depuración y Reclasificación	Gubernamental	Justicia	Ruptura
Antonio de Spínola (Partido Independiente)	Siempre entre 1974-1976	Decreto-ley 277 del 25/06/1974	Gubernamental	Justicia	Ruptura
Francisco da Costa Gomes (Partido Independiente)	Siempre entre 1974-1976	Decreto-ley 123 del 11/03/1975 : Purgas en la función publica	Gubernamental	Justicia	Ruptura

Antonio de Spínola y Francisco da Costa Gomes (partido independiente)	Siempre entre 1974-1976	Creación de la Comisión para el Análisis de los procedimientos de Depuración	Gubernamental (papel del Tribunal Supremo)	Justicia	Ruptura
Antonio de Spínola y Francisco da Costa Gomes (Partido Independiente)	Siempre entre 1974-1976	Purgas en las universidades (dimisión de profesores (de derecho))	Movimiento estudiantil	Justicia	Ruptura
Antonio Ramalho Eanes (PRD)	1976	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Purgas en los medios de comunicación (tv + radio + prensa)</li> <li>- Disolución de los servicios de censura</li> </ul>	Gubernamental*	Justicia	Ruptura
Antonio Ramalho Eanes (PRD)	1976	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Campañas de Dinamización Cultural</li> <li>- Creación de la Comisión del Libro Negro del Fascismo (formada por intelectuales y políticos)</li> </ul>	Por movilizaciones civiles y estatales (= MFA y el Servicio cívico estudiantil)	Justicia	Ruptura
Antonio Ramalho Eanes (PRD)	1976	Constitución que prohíbe una “ideología fascista”	Gubernamental	Simbólica	Ruptura

\*Antonio Ramalho Eanes (PRD) es elegido presidente de la RTP o Radio y televisión portuguesa.

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de Juan Mario Solís Delgadillo (2012) y Alexandra Barahona de Brito (2002)

TABLA 1: LOS DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO POR CCAA.

COMUNIDAD AUTONOMA	TOTAL GENERAL
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>32.289</b>
ALMERÍA	373
CÁDIZ	1.665
CÓRDOBA	7.091
GRANADA	5.048
HUELVA	3.805
JAÉN	3.253
MÁLAGA	7.797
SEVILLA	3.257
<b>ARAGÓN</b>	<b>10.178</b>
HUESCA	2.061
TERUEL	1.338
ZARAGOZA	6.779
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.246</b>
GIJÓN	1.246
<b>BALEARES</b>	<b>1.777</b>
MALLORCA	1.486
MENORCA	106
IBIZA Y FORMENTERA	185
<b>CANARIAS</b>	<b>262</b>
GRAN CANARIA	200
TENERIFE	62
<b>CANTABRIA</b>	<b>850</b>
<b>CASTILLA LA MANCHA</b>	<b>7.067</b>
ALBACETE	1.026
CIUDAD REAL	1.694
CUENCA	377
TOLEDO	3.970

<b>CASTILLA LEÓN</b>	<b>12.979</b>
ÁVILA	650
BURGOS	4.800
LEÓN	1.250
PALENCIA	1.180
SALAMANCA	650
SEGOVIA	370
SORIA	287
VALLADOLID	2.555
ZAMORA	1.237
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.400</b>
<b>C. VALENCIANA</b>	<b>4.345</b>
ALICANTE	742
CASTELLÓN	1.303
VALENCIA	2.300
<b>EUZKADI</b>	<b>9.459</b>
ÁLAVA	100
GUIPÚZCOA	340
VIZCAYA	369
DATOS DEL GOBIERNO VASCO	8.650
<b>EXTREMADURA</b>	<b>10.266</b>
<b>GALICIA</b>	<b>4.396</b>
<b>LA RIOJA</b>	<b>2.007</b>
<b>MADRID</b>	<b>2.995</b>
<b>MURCIA</b>	<b>855</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>3.431</b>
<b>CEUTA, MELILLA y NORTE ÁFRICA</b>	<b>464</b>
<b>OTROS TERRITORIOS</b>	<b>7.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>114.266</b>

Fuente: Auto del 16 de octubre de 2008. Artículo 6.